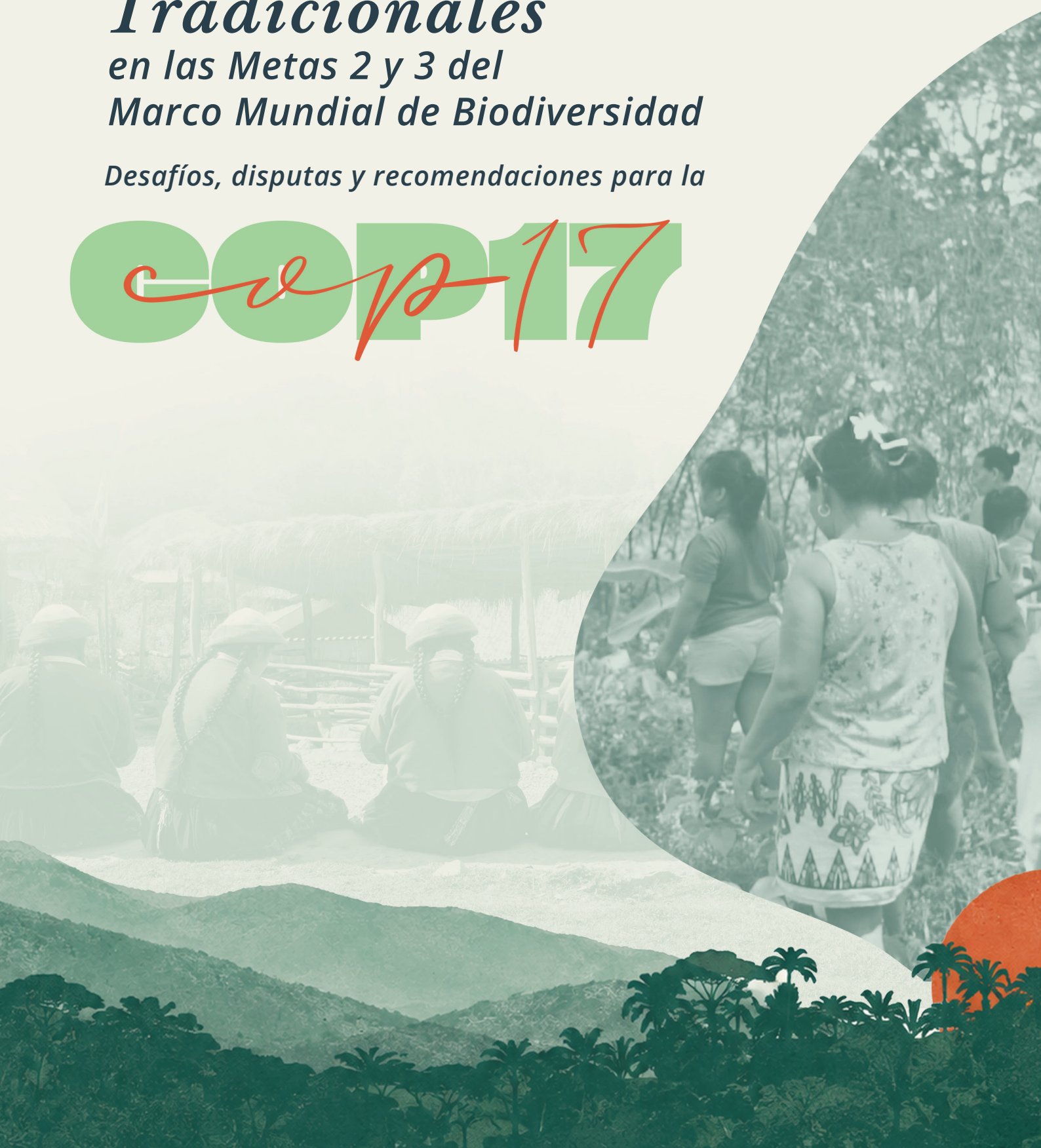
RIGHTS + RESOURCES

Territorios Indígenas y Tradicionales

en las Metas 2 y 3 del Marco Mundial de Biodiversidad

Desafíos, disputas y recomendaciones para la

COP17



Este informe fue preparado por **Almeida Dohrn Consultoría** para la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI). La autoría del informe corresponde a Fernanda Almeida, con el apoyo técnico de Ana Tossigen, Cristiam Guerrero y Valentina Aldana-Váron.

Los estudios de caso fueron elaborados por Cristiam Guerrero y revisados por Fernanda Almeida. Consultoría en comunicación por Amélia Gomes. Proyecto gráfico y diagramación por Eduardo Gabão.

Índice

4 Resumen ejecutivo

8 Introducción

12 Conservación Basada en Derechos en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)

15 El Marco Mundial de Biodiversidad y la Meta 3

16 El desafío del reconocimiento y del reporte de los Territorios Indígenas y Tradicionales

18 El estatus actual de las negociaciones

28 Prioridades para la incidencia en COP17

29 Conclusiones

30 Recomendaciones

35 Caso Panamá

41 Caso Bolivia

48 Caso Colombia



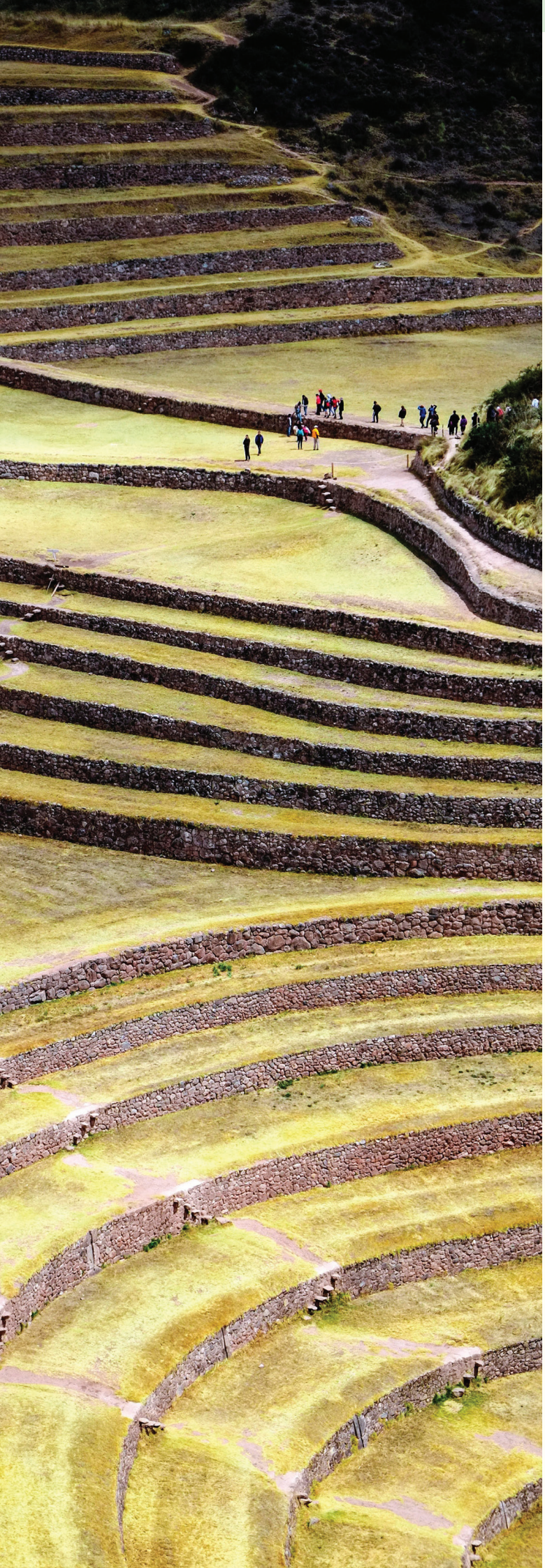
Resumen ejecutivo

Este informe forma parte del trabajo colectivo de los miembros de RRI en América Latina para fortalecer una conservación basada en derechos y la incidencia hacia la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), incluyendo de manera prioritaria las negociaciones sobre las Directrices para la implementación de las metas 2 y 3 del Marco Mundial de Biodiversidad, en el contexto de la Tarea 1.1 del Programa de Trabajo hasta 2030 sobre el artículo 8(j).[2]

En la decimoséptima edición de la Conferencia de las Partes a la Convención sobre la Diversidad Biológica (COP17), tenemos una tarea estratégica y definitoria para el rumbo de la conservación y la calidad climática de nuestro planeta: garantizar los Territorios Indígenas y Tradicionales (TIT) como una tercera vía —o más bien— la vía primaria de la conservación, respetando la soberanía, la protección y los recursos necesarios para que los Pueblos Indígenas (PI), los Pueblos Afrodescendientes (PAD) y las Comunidades Locales (CL) sigan manejando todas las tierras y territorios consuetudinarios, incluyendo aquellos incluidos o incorporados en áreas protegidas (AP) nuevas o existentes, u otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas (OMEC). Sin embargo, alcanzar ese referente y garantizar su protección efectiva depende de los resultados de las negociaciones en la COP17.

La implementación de las Metas 2 y 3 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal representa una oportunidad para fortalecer la conservación basada en derechos. Las Directrices para la implementación de estas metas serán determinantes para establecer cómo los Estados reconocerán —o limitarán— el papel de los PI, los PAD y las CL en la implementación de dichas metas.

Este informe analiza el estado de las negociaciones a la luz de la evolución normativa del CDB hacia un enfoque basado en derechos, la evidencia científica y técnica disponible sobre la contribución de los PI, los PAD y las CL a la conservación, y la comparación entre el Borrador Cero de las directrices[3], el Borrador de Panamá[4] y las propuestas presentadas por los Pueblos Indígenas, Comunidades Locales y los Pueblos Afrodescendientes[5]. A partir de este análisis, el informe identifica las principales oportunidades, riesgos y prioridades de incidencia de cara a la COP17 en Ereván, del 19–30 de octubre de 2026.



Principales mensajes

La evidencia científica confirma que los Territorios Indígenas y Tradicionales (TIT) son esenciales para alcanzar las Metas 2 y 3, y fundamenta las posiciones de negociación de PI, PAD y CL.

- A escala global, los Pueblos Indígenas gestionan o tienen derechos sobre más de una cuarta parte de la superficie terrestre del planeta y almacenan cerca de 293.061 millones de toneladas métricas de carbono[6].
- La evidencia converge en que la seguridad jurídica, la gobernanza comunitaria y el reconocimiento de derechos son los factores determinantes de estos resultados[7], lo que fundamenta directamente la posición de que los TIT deben reconocerse como una vía de conservación propia en las Directrices.

Las Directrices Voluntarias definirán el alcance real de este reconocimiento.

- Aunque no sean vinculantes, las directrices pueden orientar la legislación y las políticas nacionales y fortalecer la conservación basada en derechos. La comparación entre los borradores muestra avances en el reconocimiento simbólico del papel de los PI, los PAD y las CL, pero un retroceso en el lenguaje operativo que exige acciones concretas de los Estados, especialmente sobre CLPI, autonomía de gobernanza, reporte diferenciado y soberanía de datos.

La principal disputa consiste en definir si los TIT serán reconocidos como una vía propia de conservación.

- El debate central enfrenta dos alternativas: reconocer los TIT incluyendo a los territorios afrodescendientes como un sistema "diferente", con su propia vía de reconocimiento, o subordinarlos a las categorías existentes de Área Protegida o de Otras Medidas Eficaces de Conservación Basadas en Áreas (OMEC), calificándolos de "complementarios".
- Esta decisión condiciona todas las demás disputas de la negociación —gobernanza, CLPI, monitoreo, financiamiento y reconocimiento de derechos—, razón por la cual el informe la identifica como la disputa arquitectónica del texto.

Cinco disputas estructurales organizan la negociación de las directrices

- (1) el estatus jurídico de los TIT y de los territorios afrodescendientes —si constituyen un sistema propio o se subordinan a Área Protegida/OMEC y por lo tanto con un sistema de reporte y registro único.
- (2) el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), que pasa de derecho exigible a discrecionalidad estatal mediante calificadores como "según proceda".
- (3) el autogobierno, que retrocede de autoridad territorial activa a objeto de gestión estatal, sin señalización entre corchetes.
- (4) los Principios Rectores y el anclaje de derechos humanos, íntegramente entre corchetes, sin que se haya incorporado un principio de no regresión.
- (5) la restauración bajo la Meta 2, donde la presunción de no degradación de los territorios de los PI, los PAD y las CL fue rebajada de un párrafo en las directrices a una nota al pie.

El patrón común observado en la negociación es la ampliación de la discrecionalidad estatal mediante calificadores no señalados entre corchetes.

El mecanismo de retroceso más eficaz en esta negociación no ha sido el desacuerdo abierto, sino la inserción de calificadores —"según proceda", "de conformidad con las circunstancias nacionales"— sin que ninguna Parte los marcara como tema en disputa. En relación con el borrador cero, estos calificadores han debilitado disposiciones importantes sobre CLPI, financiamiento directo y otras.

Los Pueblos Afrodescendientes continúan insuficientemente reconocidos.

- A pesar de los avances políticos y la evidencia científica sobre la contribución de los Pueblos Afrodescendientes a la conservación, su reconocimiento normativo en el CDB sigue siendo más débil[8] y requiere negociaciones específicas, incluida su incorporación explícita en la fórmula PICL, la definición de TIT y un eventual registro mundial.

El contexto político se mueve en sentido contrario

La oportunidad de resolver estas cinco disputas a favor de los PI, PAD y CL es real, pero limitada por un contexto político adverso y cambiante, mientras que la ausencia de un principio de no regresión deja sin protección los avances ya alcanzados, convirtiendo su incorporación en una condición clave para la sostenibilidad de los demás acuerdos.

Recomendaciones para la COP17

Sobre las directrices

- ***Los TIT, incluidos los territorios afrodescendientes, deben considerarse una categoría distinta de conservación bajo las Metas 2 y 3.*** Exigir que las directrices reconozcan los TIT, incluyendo los territorios afrodescendientes, queden reconocidos como sistema de conservación autónomo y jurídicamente distinto de Área Protegida y OMEC, sin obligación de clasificarse dentro de esas categorías.
- ***Establecer mecanismos de monitoreo y reporte desagregado para los TIT.*** Instituir el registro mundial de TIT y cerrar la invisibilidad estadística de los TIT y territorios afrodescendientes mediante un sistema de monitoreo propio, validado por sus titulares.
- ***Consolidar el CLPI como derecho exigible, no como discrecionalidad estatal.*** Impulsar en la negociación un estándar que revierta la tendencia actual de degradación del consentimiento libre, previo e informado hacia un umbral discrecional, incorporando mecanismos de exigibilidad ante su incumplimiento.
- ***Fortalecer la protección efectiva de derechos colectivos y autogobierno***. Incorporar indicadores sobre autogobierno territorial en los mecanismos de reporte, y condicionar el reconocimiento de contribución a las Metas 2 y 3 a la existencia de garantías efectivas —no meramente formales— de los derechos colectivos.
- ***Incorporación explícita de los Pueblos Afrodescendientes.*** Proponer enmiendas textuales concretas que incluyan a los Pueblos Afrodescendientes de forma nominal —no inferida— en la fórmula PICL, en la definición operativa de TIT y en los criterios de elegibilidad del futuro registro mundial, cerrando la dependencia actual de una inclusión tácita bajo "comunidades locales".
- ***Protección de los TIT frente a restauración no solicitada.*** Restituir la presunción de no degradación de los TIT como principio operativo del párr. 21 —no como nota al pie— e invertir la jerarquía actual entre conocimiento tradicional y conocimiento científico en el diseño de la restauración.
- ***Financiación Directa.*** Asegurar que las directrices promuevan el fortalecimiento de programas de financiación directa para apoyar iniciativas de conservación y restauración, proyectos de planificación espacial y evaluaciones de impacto ambiental dirigidas por los Pueblos Indígenas y las comunidades locales dentro de sus territorios, y que se asegure sin calificantes debilitantes.
- ***Incorporar un principio de no regresión.*** Proponer que las directrices y también otras decisiones en la COP17 adopten explícitamente un principio de no regresión respecto de los avances ya alcanzados con respecto a los derechos de PI, PAD y LC como salvaguarda frente a su erosión en la implementación nacional — particularmente ante los recambios normativos adversos en curso en algunos países.

Sobre las negociaciones

- ***Construir nuevas alianzas con los Estados Partes*** - Ante un contexto regional cambiante, en el que se avizoran reformas regresivas que podrían afectar los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas —incluidos los PIACI—, Pueblos Afrodescendientes y Comunidades Locales, resulta necesario identificar y fortalecer alianzas con los Estados Partes que permitan avanzar en sus demandas sobre las directrices y otros temas prioritarios en la COP17.
- ***Anclar la implementación en evidencia científica sobre conservación basada en derechos.*** En las negociaciones sobre las directrices, priorizar la sistematización y difusión activa de evidencia científica robusta sobre la eficacia de la conservación liderada por PICL, como base técnica de contrapeso frente a posiciones políticas menos protectoras.



Introducción

La implementación de las Metas 2 y 3 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal representa una oportunidad para fortalecer la conservación basada en derechos. Las Directrices para la implementación de estas metas, en el marco de la Tarea 1.1 del Programa de Trabajo hasta 2030 sobre el artículo 8(j)[10], serán determinantes para establecer cómo los Estados reconocerán —o limitarán— el papel de los PI, los PAD y las CL en la implementación de dichas metas.

Este informe analiza el estado de las negociaciones a la luz de la evolución normativa del CDB hacia un enfoque basado en derechos, la evidencia científica y técnica disponible sobre la contribución de los PI, los PAD y las CL a la conservación y la comparación entre el Borrador Cero de las directrices[11], el Borrador de Panamá[12] y las propuestas presentadas por los PI, los PAD y las CL[13]. A partir de este análisis, el informe identifica las principales oportunidades, riesgos y prioridades de incidencia de cara a la Decimoséptima Conferencia de las Partes (COP17).

La Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI) es una coalición global que promueve los derechos sobre las tierras, territorios y recursos de los Pueblos Indígenas, los Pueblos Afrodescendientes y las Comunidades Locales, como base para avanzar hacia una conservación basada en derechos y en su liderazgo y gobernanza. En América Latina, los miembros de la Coalición han definido la incidencia colectiva hacia la COP17 del CDB como una prioridad de su estrategia regional, incluyendo, entre otros temas, el reconocimiento y fortalecimiento de las distintas vías de conservación lideradas por pueblos y comunidades en el marco de las Metas 2 y 3. Este informe forma parte de ese esfuerzo colectivo y busca aportar evidencia y análisis para fortalecer la incidencia de la Coalición y sus aliados en estas negociaciones.

Las directrices analizadas en este informe pueden constituir un instrumento decisivo para las estrategias de conservación basada en derechos lideradas por los PI, los PAD y las CL, cuya urgencia responde a un patrón reiterado de insuficiencia en la gobernanza global de la biodiversidad y el clima.

En materia climática, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advirtió en septiembre de 2026 que el mundo se encamina a superar los 1,5 °C de calentamiento global, probablemente en los próximos años. El informe señala que este sobrepaso no debe entenderse como el abandono del objetivo del Acuerdo de París, sino como una trayectoria que debe mantenerse lo más breve y limitada posible, reduciendo al máximo el calentamiento y avanzando simultáneamente en mitigación y adaptación para posibilitar el retorno a temperaturas inferiores a 1,5 °C lo antes posible.[14] [15]

En materia de biodiversidad, el panorama es igualmente preocupante: la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES por su sigla en inglés) advirtió que alrededor de un millón de especies están amenazadas de extinción si no se reducen eficazmente los motores de pérdida de biodiversidad[16], y las Metas de Aichi —antecedente inmediato del Marco Kunming-Montreal— no cumplieron plenamente ninguno de sus 20 objetivos globales, aunque seis se alcanzaron parcialmente[17].

El Marco Kunming-Montreal, con sus cuatro objetivos a 2050 y 23 metas a 2030, busca corregir estas fallas, pero el primer borrador del informe global de progreso publicado en junio de 2026 advierte que se requiere avanzar más rápido en todos los niveles para alcanzar la ambición de sus metas.[18]

Frente a este patrón de insuficiencia, la literatura documenta un giro paradigmático: los PI, los PAD y las CL han dejado de entenderse sólo como sujetos afectados por la crisis ambiental para ser reconocidos como agentes activos de conservación, dados sus aportes en ecosistemas estratégicos marino-costeros, de agua dulce y terrestres.[19]

Bajo esta perspectiva, los sujetos colectivos emergen como actores especialmente relevantes frente a las problemáticas socioambientales globales, dadas las relaciones históricas de interdependencia entre comunidad, territorio y territorialidad;[20] este carácter sistémico —y no meramente territorial— sustenta la exigencia, de que los TIT se reconozcan como una vía de conservación distinta y no como subcategoría de las Áreas Protegidas o las OMEC.

La combinación de vínculos profundos comunidad-territorio-territorialidad [21] con esquemas propios de gobernanza —especialmente cuando existe reconocimiento formal de derechos de tenencia— permite materializar la conservación basada en derechos: el conocimiento ecológico tradicional, las prácticas de monitoreo, las reglas comunitarias de uso y manejo, y la transmisión intergeneracional del conocimiento contribuyen directamente al mantenimiento de procesos ecosistémicos, la resiliencia territorial y la conservación de la biodiversidad[22]. Este desempeño no se explica por la ausencia de intervención humana —un malentendido frecuente del paradigma clásico de conservación—, sino por usos tradicionales, prácticas culturales, reglas comunitarias y formas de relación con el territorio que constituyen elementos propios de la identidad de los PI, los PAD y las CL.[23]

La evidencia acumulada a distintas escalas converge en que los TIT no son espacios marginales, sino centrales para el cumplimiento de las metas globales de biodiversidad. A escala global,[24] estiman que los Pueblos Indígenas gestionan o tienen derechos sobre más de una cuarta parte de la superficie terrestre del planeta, superpuesta significativamente con áreas protegidas y paisajes ecológicamente intactos; WWF confirma y amplía esta cifra: las tierras de Pueblos Indígenas y comunidades locales cubren al menos el 32% del ámbito terrestre global, el 91% en buen o moderado estado ecológico, y al menos el 36% de las áreas clave para la biodiversidad se ubican dentro de TIT.[25] En la dimensión climática, RRI estimó que los PI, los PAD y las CL gestionan aproximadamente 293.061 millones de toneladas métricas de carbono en tierras colectivas, cifra que confirma que la garantía de

derechos territoriales es tanto una demanda histórica de justicia como una condición estratégica frente a la crisis climática y de biodiversidad.[26]

A escala regional, en la Amazonía los TIT han mostrado resultados de conservación iguales o superiores a los de figuras estatales y privadas cuando existen seguridad jurídica, gobernanza territorial y capacidad real de decisión; [27] a nivel de especies, a partir de 11.872 especies de vertebrados dependientes de bosques tropicales, hallaron que al menos el 76,8% se superponen con tierras indígenas y que al menos 120 especies se encuentran únicamente dentro de ellas. Esta convergencia de escalas —terrestre, climática, regional y de especies— es la razón por la que el presente informe se dedica a estudios de caso en Panamá, Bolivia y Colombia.[28]

El hallazgo más importante de esta literatura no es que los TIT sean superiores a las áreas protegidas por definición, sino que la efectividad de la conservación depende de la calidad de la gobernanza y del reconocimiento de derechos, y no de la categoría jurídica del territorio. Oldekop et al. (2016) muestran que las áreas protegidas con resultados socioeconómicos positivos tienen más probabilidades de lograr también resultados positivos en conservación, especialmente con participación local, distribución equitativa de beneficios y reducción de desigualdades; los esquemas de gobernanza territorial comunitaria pueden aumentar la efectividad y sostenibilidad de la reforestación y la restauración mediante conocimiento propio, planeación territorial, zonificación ambiental y monitoreo comunitario.[29]

Esta evidencia comparada no sugiere que las áreas protegidas sean irrelevantes, sino que su efectividad depende del reconocimiento de derechos y de los esquemas de manejo: sin participación efectiva ni reconocimiento de derechos, los resultados pueden ser limitados o socialmente conflictivos; con derechos territoriales, gobernanza propia, comanejo, conocimiento ecológico y participación efectiva, la conservación tiende a producir mejores resultados ecológicos y sociales.[30]

Esta distinción —entre categoría de conservación y calidad de gobernanza— es precisamente lo que está en juego en la disputa, sobre si los TIT deben clasificarse como "complementarios" a las OMEC o reconocerse como un sistema "diferente": subordinar los TIT a categorías estatales arriesga la variable —gobernanza propia y derechos reconocidos— que la evidencia identifica como determinante.

Esta misma evidencia impone, sin embargo, una advertencia que el propio enfoque de conservación basada en derechos incorpora como condición, y no como añadido: su reconocimiento no puede convertirse en un nuevo escenario de extractivismo o imposición sobre los TIT. ***Por ello, la conservación basada en derechos supone la necesidad de establecer salvaguardas sociales, ambientales y mecanismos de protección como el CLPI, bajo un esquema relacional basado en derechos, reciprocidad, reconocimiento jurídico, respeto y responsabilidad.*** [31] Esto implica mitigar escenarios en los que la conservación desconozca la autoridad, la propiedad, la territorialidad y el conocimiento de los pueblos y comunidades —la razón por la que este informe dedica especial atención,

más adelante, a documentar cómo el CLPI, lejos de ser una garantía consolidada, ha sido objeto de calificadores que erosionan su exigibilidad a lo largo de la negociación de las directrices.

Es en este marco de evidencia acumulada donde debe leerse la Meta 3 del Marco Kunming-Montreal: no se limita a ampliar porcentajes de conservación, sino que exige que esta sea efectiva, equitativa, ecológicamente representativa, bien conectada y gobernada de manera justa, incluyendo el reconocimiento de los territorios indígenas y tradicionales cuando corresponda.[32] La discusión, por tanto, no puede reducirse a cuántas hectáreas se declaran protegidas, sino a quién las gobierna, bajo qué derechos, con qué salvaguardas y con qué resultados ecológicos y sociales; la inclusión de los TIT como vía independiente de conservación puede consolidar mecanismos efectivos para alcanzar las metas del Marco mediante las decisiones que se adopten en la COP17.

El instrumento normativo que puede hacer posible esta incorporación —las Directrices para la implementación de las Metas 2 y 3, en el marco del Programa de Trabajo hasta 2030 sobre el artículo 8(j) y otras disposiciones del Convenio relacionadas con los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales— constituye el objeto de este estudio. Las secciones siguientes examinan la trayectoria normativa del CDB hacia el enfoque basado en derechos, la oportunidad de la Meta 3, el desafío de reconocimiento y reporte de los TIT, las cinco disputas estructurales que definen la negociación de las directrices, y la evidencia empírica de tres estudios de caso en escala nacional, regional y de cuenca (Anexo 1).





Conservación Basada en Derechos en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)

La relación entre las áreas protegidas y los Pueblos Indígenas y comunidades locales, incluyendo a los pueblos afrodescendientes, ha estado históricamente marcada por el conflicto.[33] Las políticas de conservación basadas en áreas no han sido neutras: en numerosos casos se han construido desde enfoques excluyentes, con efectos de despojo territorial, restricción de acceso, criminalización de las prácticas consuetudinarias y desconocimiento de los sistemas propios de manejo y conservación.[34]

Frente a este historial, el propio CDB ha ido incorporando de manera progresiva un enfoque basado en derechos. El texto fundacional de 1992 ya contenía, en su Artículo 8(j), un primer reconocimiento —aunque condicionado y no territorial— del conocimiento tradicional de las comunidades indígenas y locales, exigiendo su respeto "con arreglo a la legislación nacional" y la "aprobación y participación" de sus titulares.[35]

En **2004**, la COP 7 dio el primer salto hacia gobernanza y equidad: el Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas (Decisión VII/28) introdujo el requisito de consentimiento previo informado antes de reasentar comunidades indígenas o restringir su acceso a los recursos[36], y las Directrices Akwé: Kon (Decisión VII/16) exigieron evaluaciones de impacto cultural, ambiental y social con participación plena de los Pueblos Indígenas y comunidades locales.[37]

En **2010**, la COP 10 convirtió el principio en obligación jurídica: el Protocolo de Nagoya exige que las Partes adopten medidas para asegurar el consentimiento previo informado o la aprobación y participación de los Pueblos Indígenas y comunidades locales, conforme a la legislación nacional, mientras las Metas de Aichi (Decisión X/2) fijaron la primera meta numérica de gestión "equitativa" de áreas protegidas (Meta 11) y de respeto pleno a los conocimientos tradicionales (Meta 18).[39]

En **2016,** se adoptaron las Directrices Voluntarias Mo'otz Kuxtal (Decisión XIII/18, 2016),[40] que proporcionan orientación detallada sobre el consentimiento previo informado y el uso de los conocimientos tradicionales. Posteriormente, en 2018, la Decisión 14/8 reconoció formalmente la gobernanza por Pueblos Indígenas y comunidades locales como uno de los tipos de gobernanza de áreas protegidas y otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas (OMEC), junto con la gobernanza gubernamental, privada y compartida, fortaleciendo el reconocimiento internacional de los territorios y áreas conservados por Pueblos Indígenas y comunidades locales (TICCA).[41]

En **2022,** el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montréal incorporó por primera vez el lenguaje de derechos directamente en el texto operativo de sus metas: la Meta 3 exige sistemas de áreas protegidas que reconozcan y respeten "los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, incluso sobre sus territorios tradicionales", y la Meta 22 exige su participación "plena, equitativa, inclusiva, efectiva y con enfoque de género" en la toma de decisiones.[42]

Esta trayectoria desemboca en la Decisión 16/4 **(2024)**, que aprueba el Programa de trabajo hasta 2030 sobre el artículo 8 j) y establece en sus Principios generales la garantía de una participación "plena, equitativa, inclusiva, efectiva y con perspectiva de género";[43] exige que los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales reciban "el mismo respeto y consideración" que otras formas de conocimiento;[44] adopta un enfoque holístico que reconoce las relaciones de los Pueblos Indígenas "con sus territorios, tierras y recursos";[45] condiciona el uso de los conocimientos tradicionales al consentimiento libre, previo e informado;[46] y se ancla en un enfoque basado en los derechos humanos, con una cláusula de salvaguardia explícita: "nada de lo contenido en el presente programa de trabajo se interpretará en el sentido de que menoscabe o suprima los derechos que los Pueblos Indígenas tienen actualmente o que pudieran adquirir en el futuro".[47]
Estos principios se traducen en ocho elementos operativos — conservación y restauración, utilización sostenible, participación en los beneficios, conocimientos y cultura, fortalecimiento de la aplicación y el seguimiento, participación plena y efectiva, enfoque basado en derechos humanos, y acceso a la financiación[48] —, de los cuales el primero contiene la Tarea 1.1: el mandato específico de "elaborar directrices(...) para la consecución de las metas 2 y 3 del Marco, incluido en materia de territorios indígenas y tradicionales".[49]

Esta trayectoria de veinticinco años —desde la creación del Grupo de Trabajo Especial sobre el artículo 8 (j) en el año 2000 hasta la consolidación del Órgano Subsidiario (SB8J) como órgano permanente en 2024— no tiene un equivalente específico para los pueblos afrodescendientes, aunque estos están contemplados bajo la categoría de comunidades locales.[50]

Su primer reconocimiento formal en el CDB llegó recién con la Decisión 16/6, adoptada en la misma COP16, al cierre del Decenio Internacional para los Afrodescendientes de las Naciones Unidas (2015–2024).[51] Se trata, sin embargo, de un instrumento estructuralmente más débil que el que ampara a los Pueblos Indígenas: emplea la fórmula "personas de ascendencia africana, que comprenden [colectivos] que encarnan estilos de vida tradicionales" —más restrictiva que "pueblos afrodescendientes"—, condiciona todos sus mandatos a la fórmula "según proceda, de conformidad con la legislación o las circunstancias nacionales", y no modifica ni el Convenio ni el mandato del SB8J. La Decisión 16/6 no garantiza, en consecuencia, la inclusión automática de los pueblos afrodescendientes en las directrices objeto de este capítulo. Dicha inclusión deberá negociarse en la COP17 y constituye un paso importante para su implementación.

Este informe examina el marco conceptual, político y normativo que sustenta estas directrices sobre TIT, actualmente en negociación en la CDB bajo la Tarea 1.1 del Programa de trabajo hasta 2030 sobre el artículo 8 (j), para la implementación de las Metas 2 y 3 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal.



El Marco Mundial de Biodiversidad y la Meta 3: una oportunidad para el reconocimiento de los TIT

La Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptada en 2022, compromete a los Estados a:

> *"conseguir y hacer posible que, para 2030, al menos el 30 por ciento de las zonas terrestres, de aguas continentales y costeras y marinas [...] se conserven y gestionen eficazmente mediante sistemas de áreas protegidas ecológicamente representativos, bien conectados y gobernados de forma equitativa, y otras medidas eficaces de conservación basadas en zonas geográficas específicas,* ***el reconocimiento de los territorios indígenas y tradicionales, cuando proceda,*** *integrados en paisajes terrestres, marinos y oceánicos más amplios [...]* ***reconociendo y respetando los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales****".* [52]

El nuevo Marco reconoce explícitamente a los Pueblos Indígenas y comunidades locales como socios en la conservación, la restauración y el uso sostenible de la biodiversidad,[53] y ese reconocimiento tiene un correlato institucional: el Órgano Subsidiario sobre el Artículo 8 j) (SB8J), establecido por la Decisión 16/5 en la COP16,[54] el primer órgano subsidiario permanente dedicado a Pueblos Indígenas y comunidades locales en cualquier convención ambiental de Naciones Unidas.

El SB8J tiene el mandato, en el marco de su plan de trabajo, de elaborar las directrices para la implementación de las Metas 2 y 3, con el fin de aclarar y desarrollar los parámetros relativos a los TIT. Por ello, estas directrices representan una oportunidad histórica para que la Meta 3 y su implementación fortalezcan los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, e incluyan los territorios de los pueblos afrodescendientes, sin limitarse a reproducir, bajo un lenguaje renovado, los mismos modelos excluyentes que motivaron el diagnóstico presentado en la sección anterior.

El desafío del reconocimiento y del reporte de los Territorios Indígenas y Tradicionales

La manera en que se redactó la Meta 3 en la última hora de las negociaciones de la COP 15, incluyendo el calificador "cuando proceda", abre espacio para dos interpretaciones en relación con los TIT. La primera es el entendimiento de que son "complementarios", o sea, una categoría clasificada bajo la sigla OMEC y deberían contabilizarse como tal. La segunda, que refleja el posicionamiento presentado en la propuesta TTIT/FIIB, es que son una tercera vía, o más bien, la vía primaria.[55]

Además, actualmente, el cumplimiento de la Meta 3 se reporta internacionalmente a través de la Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas (WDPA) y la Base de Datos Mundial de OMEC (WD-OECM), ambas administradas por UNEP-WCMC.[56]

El CDB define las OMEC, en su Decisión 14/8, como:

> *"una zona delimitada geográficamente que no sea un área protegida y que esté gobernada y gestionada de manera tal de lograr en forma sostenida resultados positivos y duraderos para la conservación de la diversidad biológica in situ [...] y, donde proceda, valores culturales, espirituales, socioeconómicos y otros valores pertinentes a nivel local".* [57]

A su vez, el Glosario de términos y conceptos clave pertinentes para usar en el contexto del artículo 8 j) y disposiciones conexas —adoptado mediante la Decisión 14/13 (COP 14, 2018) y actualmente bajo revisión por el SB8J— define los territorios tradicionales como:

> *"tierras y aguas tradicionalmente ocupadas o utilizadas por Pueblos Indígenas y comunidades locales".* [58]

En la práctica, aunque en algunos casos estén integrados en sistemas estatales de áreas protegidas u OMEC,[59] los TIT no están siendo contabilizados como una vía independiente, pese a estar nombrados explícitamente en el propio texto de la Meta 3.

A falta de un registro propio de TIT, el proxy más cercano disponible para evidenciar la representatividad de la contribución formal de los TIT a la meta 3 es el reporte de las áreas *gobernadas* por Pueblos Indígenas y comunidades locales, que hace parte de la Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas (WDAP) y de la Base Mundial de OMEC (WD-OMEC).[60] De acuerdo con estas cifras, globalmente, de las 320.407 Áreas Protegidas y OMEC identificadas, solamente 1.068 (el 0,3%) están *gobernadas* por Pueblos Indígenas y comunidades locales, que hace parte de la Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas (WDAP) y de la Base Mundial de OMEC (WD-OMEC). En América Latina la proporción es mayor que el promedio global, pero sigue siendo baja: de las 12.038 Áreas Protegidas y OMEC identificadas en la región, solo 817 están gobernadas por Pueblos Indígenas y comunidades locales (cerca del 15%).[61]

Aunque muchos países tengan regímenes legales que reconocen los derechos de los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y los pueblos afrodescendientes, cuyos territorios podrían clasificarse como TIT,[62] RRI —en una investigación de 30 países— no ha identificado un solo país que reconozca formalmente los TIT como una vía de conservación distinta a las Áreas Protegidas y las OMEC.

Esto se da en parte porque faltan definiciones legales y conceptuales dentro de la CDB que viabilicen este reconocimiento, como, por ejemplo, una definición y un sistema de reporte adecuado para los TIT. Las directrices analizadas en este informe tratan de sanar ese vacío, y por eso es tan esencial estar al tanto de su contenido.

La brecha es, si cabe, más aguda para los pueblos afrodescendientes, dado que todavía no hay claridad jurídica de que sus territorios deban contabilizarse como TIT en la Meta 3, a pesar de su contribución a la conservación de la biodiversidad. Por ejemplo, un estudio mapeó los territorios afrodescendientes legalmente reconocidos en Brasil, Colombia, Ecuador y Surinam y encontró que registran entre 29% y 55% menos pérdida de bosque que zonas de control comparables según su proximidad a áreas protegidas.[63] Esa evidencia, sin embargo, no se traduce en mecanismos que reconozcan sus territorios y aportes en las metas del Marco Mundial de la Diversidad biológica.

El riesgo de que esta brecha se resuelva por absorción —es decir, que los TIT terminen siendo reconocidos únicamente en la medida en que se ajusten a las categorías de Área Protegida u OMEC— es hoy el nudo más crítico de la negociación, como se verá a continuación.



El estatus actual de las negociaciones: Cinco disputas que definirán las Directrices Voluntarias del Artículo 8(j) en la COP17

Conforme descrito en las secciones anteriores, a partir de la Decisión 16/4 que estableció el nuevo Programa de Trabajo sobre el Artículo 8(j) y disposiciones conexas del CDB, con vigencia hasta 2030, el órgano subsidiario técnico competente del CDB negocia un conjunto de "directrices voluntarias": un instrumento de *soft law* que, si bien no genera obligaciones jurídicamente vinculantes nuevas, tiene por objeto orientar a las Partes en el reconocimiento del papel de los TIT en el marco de las Metas 2 y 3 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal.[64]

El valor normativo de un instrumento no vinculante

La objeción más frecuente a las directrices voluntarias es también la más superficial: que al no ser vinculantes no obligan a nada y, por tanto, no cambian nada. La objeción confunde obligatoriedad con eficacia. El derecho internacional ambiental se ha construido en buena medida sobre instrumentos que no generan obligaciones exigibles y que, sin embargo, estructuran el comportamiento de los Estados: fijan el vocabulario de la discusión, establecen los parámetros de lo que cuenta como cumplimiento y desplazan la carga argumentativa hacia quien se aparta de ellos.[65] Lo relevante no es si las directrices obligan, sino por qué vías producen efectos.

La primera vía es interpretativa. Las directrices no crean obligaciones nuevas: especifican el contenido de obligaciones que los Estados ya asumieron al ratificar el Convenio, en particular los artículos 8 j) y 10 c), y determinan qué significa cumplir las Metas 2 y 3 del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal cuando la conservación y la restauración recaen sobre territorios indígenas y tradicionales. Las metas del Marco están redactadas en términos deliberadamente amplios; esa indeterminación es la que las directrices resuelven, y de ahí que el texto que se apruebe funcione como el estándar operativo de referencia para el resto del ciclo de implementación.

La segunda vía es la recepción nacional. Los Estados no aplican el Marco Global directamente, sino a través de sus estrategias y planes de acción nacionales en biodiversidad, de su legislación de áreas protegidas y de sus políticas de restauración. Las directrices voluntarias del propio Convenio han seguido antes ese recorrido: las Directrices Akwé:Kon sobre evaluación de impacto en territorios de comunidades indígenas y locales, adoptadas en la COP 7, y las Directrices Voluntarias Mo'otz Kuxtal sobre consentimiento y distribución de beneficios, adoptadas por la Decisión XIII/18 en la COP 13, se incorporaron a marcos regulatorios y a protocolos de consulta nacionales sin haber sido nunca vinculantes.[66] El fenómeno excede al Convenio: las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la FAO (2012) han operado como referencia técnica en procesos de reforma agraria y de titulación en varios países sin fuerza obligatoria alguna.[67]

La tercera vía es la judicial, y es la más consecuente en América Latina. Un instrumento declarativo adquiere fuerza cuando los tribunales lo emplean para interpretar obligaciones que sí son vinculantes. La UNDRIP es el caso paradigmático: adoptada en 2007 como declaración, ha sido utilizada sistemáticamente por la Corte Interamericana para dotar de contenido al derecho de propiedad del artículo 21 de la Convención Americana. Un texto que reconozca a los TIT como sistema propio de conservación aporta material interpretativo a esa línea jurisprudencial; un texto que los subordine a la categoría estatal de área protegida también, pero en el sentido contrario.

La cuarta vía es financiera. Los estándares no vinculantes tienden a convertirse en criterios de elegibilidad y salvaguarda de los mecanismos de financiamiento —fondos multilaterales, cooperación bilateral, mercados regulados—, que los incorporan a sus políticas operativas y a sus condiciones de desembolso. Ahí se juega la posibilidad concreta del financiamiento directo a los pueblos y comunidades: sin un estándar internacional que lo nombre como modalidad legítima, los fondos siguen canalizándose por intermediarios estatales o de organizaciones no gubernamentales.

La quinta vía es política: un texto acordado por los propios Estados en una instancia multilateral entrega a los pueblos y comunidades un instrumento de exigibilidad frente a sus gobiernos: permite reclamar coherencia entre lo que un Estado suscribe en la COP17 y lo que hace en su territorio, y traslada la discusión desde la demanda política hacia el incumplimiento de un compromiso propio.

Ahora bien, la simetría de este razonamiento es la razón por la cual el contenido del borrador importa tanto. Todos los mecanismos descritos operan con independencia del sentido del texto: un estándar débil se recibe en la legislación nacional, se cita ante los tribunales y se incorpora a las salvaguardas financieras con la misma eficacia que uno robusto. Un instrumento no vinculante que consagre calificadores como "de conformidad con la legislación nacional" o "según proceda" no deja el asunto abierto, sino que fija un techo y provee a los Estados de un aval internacional para políticas de conservación que subordinan los territorios a decisiones estatales ajenas a las formas propias de gobierno.[68] La condición de *soft law* no vuelve inofensivo al texto: vuelve decisivo su contenido, porque lo que se apruebe será el punto de partida —el piso o el techo— de la disputa nacional durante la década siguiente.

Los avances de las negociaciones:

Este proceso de negociación ya ha tenido dos momentos formales. En el análisis que sigue se examina la distancia entre las propuestas de los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y los pueblos afrodescendientes, por un lado, y el texto actualmente en negociación, por otro. Los principales documentos de referencia son:

1. El Borrador Cero (CBD/SB8J/1/4) — el primer texto de las directrices, redactado y presentado por la Secretaría del CDB el 6 de agosto de 2025.[69] Es el punto de partida técnico de toda la negociación.

2. La propuesta TTIT/FIIB — se refiere a las modificaciones y demandas que los propios Pueblos Indígenas y Comunidades Locales formularon sobre el Borrador Cero. Quedaron sistematizadas en el Taller Internacional sobre Territorios Indígenas y Tradicionales y Conservación de la Biodiversidad.[70] A lo largo de este documento, esta propuesta se cita como "La propuesta TTIT/FIIB".

A estas posiciones se sumó la perspectiva particular de los pueblos afrodescendientes, conocida en el contexto de las negociaciones de la COP16 en Cali y actualizada en reuniones entre la autora y representantes de organizaciones representativas, en especial CITAFRO.

3. El Borrador de Panamá (CBD/SB8J/REC/1/3) —el texto que resultó de la primera ronda formal de negociación entre los Estados, adoptado el 30 de octubre de 2025 en Panamá, durante la primera reunión del SB8j-1.7[1] A diferencia del Borrador Cero, este es el texto de salida de una negociación real entre Estados: ya refleja las posiciones— a veces convergentes, a veces opuestas — que las Partes expresaron durante esa reunión.

Este capítulo compara las tres propuestas en torno a cinco disputas estructurales: los principales ejes de desacuerdo que, en conjunto, determinarán si el instrumento final protege efectivamente los derechos de los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y los pueblos afrodescendientes, o si, por el contrario, los diluye. Siempre que ha sido posible, se han incorporado las posiciones pertinentes de las Partes, según consta en la documentación oficial de la propia CDB.[72]

Cómo leer los corchetes

Una aclaración necesaria para entender lo que sigue: en la jerga de las negociaciones de Naciones Unidas, un texto "entre corchetes" [así] es un texto que los Estados todavía no acordaron —cada corchete marca una alternativa en disputa que recién se resolverá, a favor o en contra de los pueblos, en la COP17. Un texto "sin corchetes" o "limpio" es, en cambio, texto ya aceptado por consenso: nadie lo está discutiendo. Pero eso no significa que sea favorable a los pueblos— como se verá a lo largo de este documento, varias de las peores regresiones de este proceso ocurrieron precisamente fuera de los corchetes, sin que ninguna Parte las señalara como tema de disputa.

Una nota sobre el lenguaje: Pueblos Indígenas y Comunidades Locales

Este documento usa, como lo hace el propio CDB, la fórmula "Pueblos Indígenas y Comunidades Locales" (PICL) para referirse conjuntamente a ambos titulares de derechos. Vale la pena saber que esta fórmula no es neutra ni está exenta de disputa. Durante la SB8j-1 en Panamá, México pidió explícitamente no confundir a los Pueblos Indígenas —sujetos de derecho internacional propio— con las comunidades locales, y el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII) llegó a pedir que se eliminara el término "comunidades locales" de toda mención junto a "Pueblos Indígenas".

Esta recomendación del UNPFII fue uno de los puntos más conflictivos de toda la sesión: El Grupo Africano, Brasil (que en este punto habló también "en nombre de los países BRICS"), Jordania, India, Haití y la propia RDC insisten en mantener "PICL" como término único e indivisible y lograron que quedara entre corchetes, sin resolver.[73]

Qué muestra la comparación de las tres propuestas

Puestos uno junto al otro, los tres textos revelan un patrón que ninguna lectura párrafo por párrafo muestra por sí sola: la negociación no avanzó en una sola dirección. Ganó terreno el lenguaje de reconocimiento cultural y espiritual —términos como "biocultural", "espiritualidad", la tríada "tierras, aguas y territorios", o la protección explícita de los territorios como objetivo propio de las directrices—. Pero, al mismo tiempo y dentro del mismo texto, perdió terreno el lenguaje operativo: un lenguaje que supone un deber y no una recomendación a los estados. Es decir, perdieron terreno el CLPI, la autonomía de gobernanza, los sistemas de reporte y la soberanía sobre los propios datos.

Comparando el Borrador Cero con el Borrador de Panamá a la luz de las demandas de la propuesta TTIT/FIIB, este documento identifica diez avances plenos y cinco incorporaciones parciales de esas demandas, frente a once regresiones que ya quedaron fijadas en el texto —es decir, incorporadas sin corchetes, ya no en disputa— y cinco disposiciones que la negociación incluyó entre corchetes (Veáse Tabla: Prioridades para COP17).[74]

El propósito de este capítulo es identificar las disputas estructurales que organizan toda la negociación, explicar por qué cada una importa —política y jurídicamente— y ayudar a las organizaciones los PI, los PAD y las CL a decidir dónde concentrar su incidencia.

Un patrón que conecta las cinco disputas

Casi todos los retrocesos que se describen a continuación comparten una misma técnica: agregar, a disposiciones que en el Borrador Cero no los tenían, calificadores como "según proceda", "de conformidad con las circunstancias nacionales" o "cuando proceda". En la práctica, estas frases le dan a cada Estado la potestad de decidir, caso por caso, si una regla se aplica o no en su territorio. Esto importa para la incidencia porque no se trata de cinco batallas aisladas, sino de una sola lógica que se repite en el CLPI, en la autonomía de gobernanza, en el acceso a la información y en el financiamiento directo: la sustitución de una obligación internacional por una decisión discrecional del Estado.

Disputa 1. ¿Sistema propio o absorción? El estatus jurídico de los TIT y de los territorios afrodescendientes

La pregunta detrás de esta primera disputa es si un TIT necesita encajar en las categorías de OMEC o Área Protegida —diseñadas por y para los Estados— para que su conservación cuente hacia la Meta 3, o si se reconoce como un sistema propio, con su propia lógica y su propia vía de reconocimiento.

Qué cambió

El párr. 26 del Borrador Cero establecía que el reconocimiento de los TIT "no debería, según proceda, requerir una clasificación en la categoría de áreas protegidas u otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas" —nótese que incluso en el Borrador Cero ya aparecía el calificador "según proceda".

La propuesta TTIT/FIIB pidió ir más lejos: que los TIT se reconocieran como sistemas "distintos" y "diferentes" de las Áreas Protegidas y las OMEC, sin ambigüedad. En las negociaciones de Panamá se convirtió todo el párrafo en un corchete con dos alternativas irreconciliables: "complementario" frente a "diferente". Incluso el título de las directrices quedó íntegramente entre corchetes, reflejando la misma tensión de fondo: si los TIT se nombran como una categoría propia o como un apéndice de la planificación espacial y las OMEC.

Esta disputa está directamente conectada con una segunda: la del sistema de reporte. El Borrador Cero proponía crear un registro mundial de TIT —comparable a las dos bases de datos globales que hoy existen para áreas protegidas y OMEC, la Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas (WDPA) y la de OMEC (WD-OECM), ambas administradas por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente a través de su Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación (UNEP-WCMC)[75] —, con la garantía explícita de que los propios pueblos decidirían qué información compartir sobre sus territorios y cómo se usaría (lo que este documento llama "soberanía de datos"). El Borrador de Panamá eliminó ese registro mundial propio y lo sustituyó por sistemas nacionales, condicionados a "las circunstancias, la legislación y las prioridades" de cada país; la soberanía de datos, además, perdió la precisión sobre quién recopila y almacena la información. Un indicador que la propuesta TTIT/FIIB pidió crear específicamente para medir la superficie bajo gobernanza indígena reconocida —distinto del indicador general del CDB sobre cambios de uso del suelo— no entró en ninguna versión del texto.

Por qué importa

Este párrafo define el carácter de todo el instrumento porque enfrenta dos lógicas irreconciliables. La posición de los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales sostiene que los TIT son sistemas propios y diferenciados, cuya conservación es intrínseca a su gobernanza —no necesitan clasificarse como Área Protegida ni OMEC para ser reconocidos como conservación eficaz.

La alternativa "complementario" abre la puerta para que los TIT solo cuenten para la Meta 3 en la medida en que se ajusten a categorías de conservación diseñadas para los Estados, subordinando la gobernanza propia a los marcos nacionales de áreas protegidas. La disputa sobre el registro mundial tampoco es un asunto técnico secundario: sin un mecanismo de reporte propio, los TIT seguirán siendo estadísticamente invisibles en el sistema global de seguimiento de la Meta 3, sin importar cuánto territorio gestionen ni cuán eficaz sea su conservación.

Cómo se posicionaron los Estados en Panamá

Durante la negociación de octubre de 2025, las posiciones de los Estados sobre este punto se dividieron con bastante claridad. A favor de un reconocimiento más fuerte de los TIT como vía propia: Guatemala fue la voz más clara, pidiendo explícitamente "avanzar" en el reconocimiento, y Brasil apoyó también el reconocimiento de los TIT como vía específica bajo la Meta 3 (aunque con calificadores). Namibia no tomó posición sobre el fondo del asunto, pero criticó abiertamente el uso de corchetes como método de negociación —una crítica procedimental que, en la práctica, favorece resolver el punto en vez de posponerlo. La Unión Europea y Egipto pidieron más tiempo de discusión, sin oponerse abiertamente.

Un grupo amplio de países —el Grupo Africano (a través de Zimbabue), China, Malasia, India, Arabia Saudita, Brasil y Japón— apoyó el primer borrador de las directrices que establecía la independencia de los TIT en principio, pero insistió en implementarlas "según los sistemas legales nacionales, estructuras de gobernanza, circunstancias y contextos" de cada país: el mismo patrón de calificadores descrito en la introducción de este documento. Noruega propuso aquí condicionar el reconocimiento de los TIT a "las circunstancias nacionales". Nueva Zelanda pidió reinsertar, en este mismo punto, un "enfoque basado en derechos humanos".[76] En sus declaraciones de cierre de la reunión, el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB) pidió explícitamente el "reconocimiento de los TIT como un sistema autónomo que contribuye a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, distinto de las áreas protegidas y otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas" —una formulación que coincide casi palabra por palabra con la posición que este documento describe como la más protectora de los derechos de los pueblos.[77]

La dimensión afrodescendiente

Para los Pueblos Afrodescendientes, esta disputa tiene una capa adicional. El propio concepto de "Territorio Indígena y Tradicional" fue construido desde marcos normativos pensados para Pueblos Indígenas y no menciona explícitamente las formas propias de gobernanza territorial de los Pueblos Afrodescendientes. La mención expresa de la Decisión 16/6,[78] el único instrumento normativo que menciona a las poblaciones de descendencia africana explícitamente, aparece entre corchetes en el texto actual; sin ella, el instrumento queda desconectado de su propio fundamento normativo previo. Y la inclusión explícita de los territorios afrodescendientes dentro del concepto de TIT —una demanda que no aparece en ninguna versión del texto— no es solo una cuestión de nombre: determina si esos territorios entrarían, en igualdad de condiciones con los territorios indígenas, al futuro registro mundial y al indicador diferenciado, o si quedan otra vez fuera del sistema de contabilización de la Meta 3.

Por qué es prioridad máxima en la COP17

Esta es la disputa de la que dependen todas las demás. Si "complementario" se consolida, la autonomía de gobernanza (disputa 3), el CLPI (disputa 2) y los principios rectores (disputa 4) se negociarán, de hecho, dentro de un marco ya subordinado a las categorías estatales de conservación. La posición estratégica más eficaz es insistir en "diferente" o "distinto", exigiendo, como paquete indisociable, el registro mundial, la restitución plena de la soberanía de datos y un indicador propio con cobertura explícita para territorios afrodescendientes.

Disputa 2. El consentimiento libre, previo e informado: de derecho a discrecionalidad estatal

El CLPI es el derecho de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales a decidir —con información completa, sin presión y antes de que se tome la decisión— sobre cualquier medida que afecte sus tierras, aguas o territorios. Es uno de los derechos centrales reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), adoptada por la Asamblea General de la ONU en 2007. En este proceso de negociación, el CLPI es el mecanismo concreto que convierte el reconocimiento territorial en un derecho exigible: la diferencia entre poder bloquear o moldear una decisión sobre el propio territorio, y depender de que el Estado decida, discrecionalmente, si esa decisión "procede".

Qué cambió

El Principio D (párr. 11) del Borrador Cero exigía respetar el CLPI en la planificación espacial y en las evaluaciones de impacto ambiental, sin calificadores que lo limitaran. El Borrador de Panamá le añadió, sin corchetes, "según proceda" y "de conformidad con las circunstancias nacionales". El párr. 34/35 —que exige CLPI antes de crear o ampliar áreas protegidas u OMEC— sumó tres calificadores nuevos: "en consulta con", "según proceda" y "legislación nacional". En el ámbito de la restauración (párr. 21), el CLPI sí entró como novedad —una ganancia real que antes no existía—, pero con el mismo tipo de calificador, y entre corchetes. Y el párr. 10 (Principio C), que remite a la UNDRIP y al acceso a la justicia, se convirtió en uno de los párrafos más disputados de todo el documento, con múltiples alternativas en corchetes.

Por qué importa

Cada calificador añadido funciona como un punto de veto adicional para que un Estado declare que el CLPI "no aplica" en su caso. Jurídica y políticamente, esto desplaza al instrumento de ser una directriz internacional que fija un piso mínimo por encima de la variación doméstica, hacia un texto que se remite, en cada punto crítico, a la legislación nacional —precisamente la variable que las directrices deberían poder corregir cuando esa legislación es débil o inexistente.

La dimensión afrodescendiente

Para los Pueblos Afrodescendientes, esta erosión general se combina con una laguna estructural distinta: las disposiciones de CLPI operan sobre la fórmula "Pueblos Indígenas y Comunidades Locales". En los sistemas jurídicos donde los Pueblos Afrodescendientes no están clasificados como "pueblos tribales" —que es la mayoría—, su derecho al CLPI no queda formalmente garantizado si el texto no los menciona explícitamente.[79] Esta laguna no es semántica: tiene consecuencias operativas directas sobre la Meta 2 y la Meta 3, porque los proyectos estatales de restauración y las designaciones de áreas protegidas en territorios afrodescendientes pueden avanzar sin consulta ni consentimiento de sus titulares, si el texto final no los nombra.

Por qué es prioridad en COP17

Porque es la disputa más transversal: aparece, con distinta redacción, en casi todas las secciones operativas del texto, y porque ya está fijada —no entre corchetes— en dos de sus apariciones más importantes. Revertirla requiere una acción específica y coordinada: eliminar "según proceda" y "circunstancias nacionales" del cuerpo de los párrs. 11 y 34/35, mantener la referencia a la UNDRIP sin alternativas diluidas en el párr. 10, y vincular explícitamente esta prioridad con la del reconocimiento afrodescendiente: sin todas resueltas juntas, la garantía de CLPI seguirá siendo condicional para dos de los tres grupos de titulares que este instrumento pretende proteger.

Disputa 3. Autogobierno: de autoridad territorial activa a objeto de gestión estatal

Qué cambió

Tres cambios, ninguno entre corchetes, degradan la capacidad de gobernanza de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales. En el párr. 32/33, que antes leía: « Debería respetarse la autonomía de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales en la gestión y gobernanza de sus tierras, territorios y aguas, incluidas zonas marina y costeras, mediante el reconocimiento de sus sistemas de justicia y gobernanza y la provisión de apoyo financiero y técnico.» se incluyó el calificador "cuando proceda" al inicio.

A su vez, en el párr. 37/38, que antes leía: «Se deberían establecer, fortalecer y mantener, según proceda, mecanismos indígenas y tradicionales, incluidos marcos de gobernanza o consejos asesores autónomos, de conformidad con los sistemas de gobernanza indígenas y tradicionales(..).» pasó a leerse «Deberían establecerse mecanismos indígenas y tradicionales, incluidos marcos de gobernanza pertinentes, o fortalecerse o mantenerse, según sea necesario.» o sea, los "marcos de gobernanza o consejos asesores autónomos" se convirtieron en "marcos de gobernanza pertinentes": el adjetivo "autónomos" desaparece, y la construcción gramatical cambió de voz activa (los pueblos que establecen sus propios mecanismos) a voz pasiva (mecanismos que "deberían establecerse", sin que el texto diga quién los establece).

Por fin, en el párr. 40/41, el reconocimiento de los sistemas de gobernanza consuetudinaria en el diseño, gestión y seguimiento de áreas protegidas cambió su verbo de "deberían" a "podrán".Esta diferencia entre "deberían" y "podrán" no es un matiz de estilo. En el lenguaje de los instrumentos internacionales, "deberían" crea una expectativa normativa: un Estado que no lo implementa está incumpliendo algo, aunque sea una recomendación y no una obligación dura. "Podrán", en cambio, convierte el reconocimiento en una opción sin ninguna consecuencia si el Estado decide no ejercerla.

Por qué importa

Estos tres cambios comparten un mismo efecto: convierten a los Pueblos Indígenas, las Comunidades Locales y los Pueblos Afrodescendientes de autoridades territoriales activas —titulares de instituciones de gobernanza propia con capacidad de decisión— en actores que el Estado puede o no incorporar a la gestión de áreas protegidas, según su propia discreción. Lo mismo ocurre con el cambio a voz pasiva: cuando el texto dice que "deberían establecerse mecanismos" en lugar de que los Pueblos Indígenas y las comunidades locales "establecen sus propios mecanismos autónomos", desaparece la pregunta de quién tiene la autoridad de decisión —y esa ambigüedad, en la práctica, suele resolverse a favor del Estado.

La dimensión afrodescendiente

Ninguno de estos tres cambios menciona a los Pueblos Afrodescendientes —ni para incluirlos ni para excluirlos—, pero les afecta en la misma medida que a los Pueblos Indígenas: la gobernanza de quilombos, palenques, territorios colectivos de comunidades negras y territorios ancestrales afrodescendientes se apoya en las mismas instituciones consuetudinarias que estos párrafos debilitan. Son regresiones sobre el alcance general del texto, no sobre una categoría específica, lo que significa que revertirlas beneficia automáticamente a ambos grupos, sin necesidad de una negociación terminológica separada.

Por qué es prioridad en la COP17

Porque son regresiones invisibles: ninguna lleva corchetes que las señalen como tema de disputa, de modo que si ninguna organización las nombra explícitamente en sus intervenciones y propuestas escritas, quedarán como texto de consenso al llegar a COP17. Sin embargo, una vez identificado, es posible revertirlo, porque aun los textos que están en consenso pueden cambiarse durante las negociaciones, pero hace falta que algún Estado Parte plantee la cuestión para que sea discutida. Los textos entre corchetes serán necesariamente objeto de negociación.

Disputa 4. La base normativa entre corchetes: los Principios Rectores y el anclaje de derechos humanos

La Sección III del Borrador Cero agrupa los "Principios Rectores": ocho principios, identificados de la A a la H, pensados para funcionar como la base conceptual de todo el instrumento. De estos principios —relaciones espirituales y bioculturales; tenencia de tierras-aguas-territorios; la UNDRIP y el acceso a la justicia; el CLPI; el conocimiento tradicional; género e intergeneracionalidad; y espiritualidad y sistemas de valores— dependen, en la práctica, todos los párrafos operativos del texto: si estos principios no están firmes, las secciones sobre planificación espacial, restauración y financiamiento quedan sin un fundamento de derechos del que sostenerse.

Qué cambió

El Borrador de Panamá puso íntegramente entre corchetes toda la Sección III (párrs. 8 a 15), como bloque completo. Es un movimiento inusual y más grave que dejar un tema abierto por primera vez: implica reabrir, para renegociar desde cero, la base conceptual completa.

Dentro de ese bloque, dos elementos concentran el mayor riesgo. El párr. 10 (Principio C, sobre la UNDRIP y el acceso a la justicia) está bien disputado, con múltiples alternativas en corchetes.

Y el párr. 5 ,la fundamentación biocultural que abría las directrices fue eliminada por completo y sin corchetes. En la íntegra el párrafo decía:

"Las directrices parten de la relación intrínseca que los Pueblos Indígenas y las comunidades locales tienen con la naturaleza, abarcando diversos conceptos, tales como biodiversidad, ecosistemas, Madre Tierra y sistemas de vida. Esa relación se refleja en sus culturas, valores espirituales, ceremonias, sistemas de gobernanza, historias, tradiciones orales, lenguas indígenas, sistemas de conocimientos tradicionales y leyes y procedimientos consuetudinarios. Esos elementos contribuyen a la conservación, restauración y planificación espacial de la diversidad biocultural, de conformidad con las circunstancias nacionales y de manera coherente con la sección C del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal."

Como estaba situado en la sección I, que presenta la fundamentación del documento y el fundamento conceptual que conecta toda su arquitectura, la eliminación de este párrafo elimina también la fundamentación biocultural. Sin embargo, esta reaparece, aunque de manera más débil, en la sección que presenta los principios de las directrices, y desaparece justo cuando el término "biocultural" entra, como ganancia, en el Principio A. El resultado es una ganancia que perdió su cimiento: el concepto avanza en el principio y retrocede en la fundamentación que le daba sentido. A esto se suma que el Principio H —de no regresión, propuesto por la propuesta TTIT/FIIB para que las Partes se comprometan a no retroceder respecto de lo ya alcanzado— no entró en ninguna versión del texto.

Por qué importa

Si la Sección III cae o se diluye en la negociación final, las directrices pierden su fundamento normativo completo. La referencia a la UNDRIP es, además, el único punto del texto que vincula estas directrices —un instrumento del CDB— con el derecho internacional de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas; si esa referencia cae o se diluye en alguna de sus alternativas entre corchetes, el documento debilita ese vínculo. Y la ausencia de un principio de no regresión también representa un riesgo real.

El reconocimiento de los Pueblos Afrodescendientes

Ninguno de los ocho Principios (A a H) menciona a los Pueblos Afrodescendientes. La disputa de fondo aquí no es sobre el contenido de cada principio, sino sobre quién es su titular.

Considerando el contexto más amplio de las negociaciones bajo el SB8j-1 en Panamá, Colombia fue la voz que más impulsó este tema en todos los puntos de la agenda, con el apoyo explícito de Brasil, Uruguay y Panamá —particularmente en el proceso de revisión del Glosario voluntario de términos del artículo 8(j).

En las directrices de TIT propiamente dichas, la pregunta de “cuándo y cómo referirse a los pueblos afrodescendientes” sigue sin resolverse. Además de la mención de La Decisión 16/6 que aparece mencionada entre corchetes en el borrador. El texto actual incluye, en sus consideraciones iniciales, una aclaración según la cual el término «Comunidades Locales» comprende a los Pueblos Afrodescendientes. Esta constituye la posición mínima aceptable como alternativa de repliegue, en caso de que la propuesta principal no prospere. Sin embargo, la eliminación de esta aclaración entre corchetes convertiría el silencio definitorio en una exclusión estructural.

Por qué es prioridad máxima en COP17

Junto con la disputa 1, esta es arquitectónica, no operativa: determina si el instrumento tiene o no una base de derechos coherente. Sacar la Sección III de corchetes sin resolver sus tensiones internas sería una victoria procedimental sin contenido real. Introducir el Principio H de no regresión es, en este sentido, la garantía mínima de que cualquier avance logrado en COP17 sobreviva a la implementación nacional.



Disputa 5. Restauración (Meta 2): la presunción de no degradación y la jerarquía del conocimiento

La Meta 2 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal compromete a los Estados a restaurar el 30% de los ecosistemas degradados del planeta para 2030. Esta disputa es sobre qué territorios se cuentan como "degradados" en primer lugar, y quién lo decide.

Qué cambió

El Borrador Cero establecía, en el cuerpo del párr. 21, que los esfuerzos de restauración debían centrarse en ecosistemas degradados "reconociendo que los territorios de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales no están necesariamente degradados". En el Borrador de Panamá, ese principio de no degradación se retiró del cuerpo del texto y pasó a una nota al pie —un desplazamiento que representa una regresión formal, porque las notas al pie no generan obligaciones operativas ni figuran en las secciones que los países efectivamente implementan.

El párr. 22 sigue enumerando el conocimiento tradicional como complemento de las evaluaciones científicas, no como criterio prioritario o equivalente, en ambas versiones del texto: la propuesta TTIT/FIIB de invertir esa jerarquía no entró. El párr. 23 perdió la referencia a las Estrategias y Planes de Acción Nacionales en materia de Biodiversidad (NBSAP, el instrumento de planificación nacional que cada país presenta al CDB) en el co-diseño de la restauración, eliminada sin corchetes. Y el nuevo párr. 24 —sobre seguridad alimentaria e hídrica, resiliencia climática y fortalecimiento cultural en territorios indígenas y tradicionales, una ganancia sustancial adoptada de la propuesta TTIT/FIIB— debilitó su fuerza normativa de "deben" a "deberían".

A esto se suma la eliminación del párr. 25 —que en el Borrador Cero protegía, como disposición autónoma, las contribuciones de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales a la conservación en marcos legales, incluido el uso consuetudinario sostenible—, que retira, sin dejarla en disputa, una de las pocas salvaguardas explícitas frente a la criminalización de la caza, la pesca, la recolección y el manejo forestal consuetudinarios, prácticas que afectan por igual a comunidades indígenas y afrodescendientes.

Por qué importa

Sin una presunción operativa de no degradación en el cuerpo del texto, un territorio indígena, de comunidad local o afrodescendiente puede ser designado por el Estado, sin evaluación previa que acredite degradación real, como objeto de intervención de restauración —precisamente en los territorios donde las prácticas propias de manejo (rotación de cultivos, manejo del fuego, siembra de especies nativas) suelen mantener el ecosistema en mejor estado que las áreas de control circundantes. Combinada con la jerarquía persistente que sitúa el conocimiento tradicional como complemento —no como método por defecto— de la evaluación científica, esta laguna abre la puerta a modelos de restauración externos que desplazan las prácticas propias en lugar de fortalecerlas.

La dimensión afrodescendiente

Esta misma laguna es, casi en idénticos términos, una de las demandas centrales de los Pueblos Afrodescendientes: sus territorios —costeros, fluviales, de selva tropical y de sabana— son con frecuencia objeto de programas estatales o privados de restauración sin evaluación previa de su estado real de conservación, lo que puede imponer técnicas externas que desplazan prácticas propias de manejo como la agroforestería comunitaria o el manejo de várzea.

Por qué es prioridad en COP17

Porque es, de las cinco disputas, la que tiene el arreglo técnico más simple y de menor costo político —elevar una nota al pie al cuerpo del párrafo, eliminar un calificador entre corchetes.



Prioridades para la incidencia en COP17

Las cinco disputas no pesan lo mismo. Las disputas 1 (estatus jurídico de los TIT y sistema de reporte) y 4 (Principios Rectores y anclaje de derechos humanos) son arquitectónicas: de ellas depende si el instrumento tiene, o no, una base de derechos coherente, y si los TIT —y, donde corresponda, los territorios afrodescendientes— se reconocen como sistemas propios o quedan subordinados a categorías estatales de conservación. Son, por eso, la prioridad más alta: requieren movilizar al bloque de Estados aliados con reconocimiento constitucional de territorios indígenas y afrodescendientes antes de llegar a Ereván.

La disputa 2 (CLPI) es la más operativamente peligrosa porque ya está fijada —no en disputa, sino incorporada— en dos de sus apariciones centrales, y porque el mismo patrón de calificadores se repite en toda la negociación. La disputa 3 (autogobierno) es la más invisible: ningún corchete la señala, por lo que exige que las organizaciones la nombren explícitamente en sus intervenciones para que no pase inadvertida como texto de consenso.

La disputa 5 (restauración) es la de arreglo más simple, porque no hay necesidad de reabrir debates de principio.

Para las organizaciones de Pueblos Afrodescendientes, la estrategia debe operar en dos frentes distintos y articulados. Primero, sumarse a la posición de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales en los textos bajo presión —disputas 1, 2 y 4—, que de resolverse hacia un alcance amplio benefician indirectamente a los territorios afrodescendientes. Segundo, presentar propuestas propias de inserción textual allí donde el texto guarda silencio total —la inclusión explícita en la fórmula PICL, la cobertura de territorios afrodescendientes en el TIT y en el registro mundial, la protección frente a restauración no solicitada—, porque ninguna posición indígena o de comunidades locales, por sí sola, cierra ese silencio. Esta doble estrategia es tanto más necesaria.



Conclusiones

Considerando la evidencia científica revisada y los tres estudios de caso analizados, este informe sostiene que los TIT —entendidos de manera amplia como una categoría que engloba a los territorios de los Pueblos Afrodescendientes— constituyen una vía de conservación efectiva y empíricamente demostrada, cuyos resultados en materia de estabilidad forestal, prevención de la deforestación y gobernanza territorial son comparables o superiores a los alcanzados por las figuras estatales de conservación. Los casos de Panamá, Bolivia y Colombia confirman, a escala nacional, subnacional y de cuenca respectivamente, que la seguridad jurídica, la gobernanza comunitaria y el reconocimiento efectivo de derechos territoriales son las variables que explican estos resultados.

Sobre esta base empírica, el informe examinó la trayectoria normativa de veinticinco años del CDB hacia un enfoque de conservación basado en derechos, y constató que esa trayectoria culmina hoy en la negociación de las Directrices Voluntarias bajo la Tarea 1.1 del Programa de Trabajo hasta 2030 sobre el artículo 8(j): el instrumento llamado a determinar si ese reconocimiento se traduce en obligaciones operativas o queda reducido a lenguaje simbólico.

La comparación sistemática entre el Borrador Cero, el Borrador de Panamá y las propuestas de los Pueblos Indígenas, las Comunidades Locales y los Pueblos Afrodescendientes revela un patrón consistente: mientras el lenguaje de reconocimiento cultural y espiritual avanza, el lenguaje que demanda de los estados acción —el consentimiento libre, previo e informado, la autonomía de gobernanza, el sistema de reporte diferenciado y la soberanía de datos— retrocede, mayoritariamente mediante calificadores de discrecionalidad estatal (“según proceda”, “de conformidad con las circunstancias nacionales”) insertados sin señalización entre corchetes, es decir, ya incorporados como texto de consenso.

De las cinco disputas estructurales identificadas, dos resultan arquitectónicas: el estatus jurídico de los TIT frente a las categorías de Área Protegida y OMEC, y la integridad de los Principios Rectores que ancla el instrumento en el derecho internacional de los derechos humanos. De su resolución depende si las demás disputas —el CLPI, el autogobierno y la restauración bajo la Meta 2— se negocian dentro de un marco de reconocimiento propio o quedan subordinadas a categorías estatales. La ausencia de un principio de no regresión, propuesto y no incorporado en ninguna versión del texto, deja además sin garantía normativa cualquier avance que se consolide en la COP17.

El informe documenta asimismo que los Pueblos Afrodescendientes permanecen insuficientemente anclados en este proceso: a diferencia de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales, no cuentan con una trayectoria normativa equivalente en el CDB, su único fundamento formal —la Decisión 16/6— es estructuralmente más débil, y su inclusión explícita en la fórmula PICL, en la definición de TIT y en el futuro registro mundial permanece sin resolver.

En este contexto, la contribución central del informe es doble: por un lado, sistematiza la evidencia empírica que sustenta el reconocimiento de los TIT como vía de conservación propia; por otro, identifica con precisión dónde y cómo ese reconocimiento se erosiona en el texto actualmente en negociación, distinguiendo entre retrocesos visibles —aún en disputa dentro de corchetes— e invisibles —ya fijados como consenso—. Esta distinción es la que permite a las organizaciones de Pueblos Indígenas, Comunidades Locales y Pueblos Afrodescendientes concentrar su incidencia, en la ventana estrecha que resta antes de la COP17, en los puntos donde la evidencia científica y el texto normativo divergen de manera más consecuente.

Recomendaciones

Sobre las directrices

1. Los TIT, incluidos los territorios afrodescendientes, deben considerarse una categoría distinta de conservación bajo las Metas 2 y 3.

Qué debe lograrse:

Que los TIT y los territorios afrodescendientes queden reconocidos como sistema de conservación autónomo y jurídicamente distinto de Área Protegida y OMEC, sin obligación de clasificarse dentro de esas categorías.

Enmiendas específicas de las directrices:

- Párr. 26 — sustituir «complementario» por «diferente» o «distinto» en la caracterización de los TIT frente a AP/OMEC; retirar el corchete fijando esta redacción.
- Párr. 26 — añadir cláusula explícita de que el reconocimiento como TIT no genera obligación de clasificación como AP u OMEC.
- Vincular esta autonomía categórica con el registro mundial (Párr. 53) de modo que tenga efecto operativo en la contabilidad de la Meta 3.

2. Establecer mecanismos de monitoreo y reporte desagregado para los TIT.

Qué debe lograrse:

Instituir el registro mundial de TIT y cerrar la invisibilidad estadística de los TIT, incluyendo a los territorios afrodescendientes mediante un sistema de monitoreo propio, validado por sus titulares.

Enmiendas específicas:

- Párr. 53 — restituir el registro mundial de TIT (eliminado y sustituido por sistemas nacionales condicionados a legislación interna), especificando criterios mínimos de reporte: gobernanza, sistemas de conocimiento, uso sostenible, planes de gestión y monitoreo propios.
- Párr. 53 — incorporar estructura de reporte en tres niveles (global, nacional, comunitario) y establecer que la validación del cumplimiento corresponde a las organizaciones indígenas y afrodescendientes, no a entidades externas.
- El sistema de registro de los TIT debe capturar no solo la extensión territorial, sino también la condición del territorio (conservado, degradado, en restauración), su gobernanza y sus herramientas de gestión propias (planes de vida, ordenamiento, manejo).
- Los elementos mínimos de reporte deben ser gobernanza, sistemas de conocimiento y cultura, uso sostenible de la biodiversidad, y planes de gestión y monitoreo —para mostrar cómo los Pueblos Indígenas sostienen la conservación desde sus propios sistemas de vida, sin reducir el reporte a cifras descontextualizadas.
- El reporte debe operar en tres niveles — global, nacional y comunitario—, siendo este último, el más cercano a las prácticas reales del territorio, el fundamento del sistema.
- La validación del cumplimiento de los criterios de gestión del territorio y su biodiversidad como área de conservación no debe recaer exclusivamente en entidades externas, sino en las propias organizaciones indígenas, reconociendo así su legitimidad territorial y autoridad política.
- El sistema debe apoyarse en los sistemas de conocimiento propios —mayores, sabios y sabias, y transmisión intergeneracional— y en monitoreo permanente y vigilancia territorial continua, sin los cuales no habría información confiable para la defensa del territorio.
- Todo sistema de registro debe regirse por el consentimiento libre, previo e informa-

do, con soberanía de la información como condición constitutiva: debe quedar claro qué se comparte, qué se resguarda, quién decide y bajo qué condiciones, para evitar que conocimientos sensibles se usen con fines extractivos.

- párr.54 — restituir íntegramente la obligación del CLPI para la integración de datos territoriales en las NBSAPs e informes nacionales (eliminada sin corchetes).
- Párr. 53 — insertar cláusula de soberanía de datos: qué se comparte, qué se resguarda y quién decide, como condición constitutiva del registro.

3. CLPI como derecho exigible

Qué debe lograrse:

Impulsar en la negociación un estándar que revierta la tendencia actual de degradación del consentimiento libre, previo e informado hacia un umbral discrecional, incorporando mecanismos de exigibilidad ante su incumplimiento.

Enmiendas específicas:

Principio D / párr. 11 — eliminar «según proceda» y «de conformidad con las circunstancias nacionales».

Párrs. 34/35 — eliminar los tres calificadores («en consulta con», «según proceda», «legislación nacional») que condicionan el CLPI antes de crear o ampliar áreas protegidas.

Párr. 21 — eliminar el corchete «[según proceda]» aplicado al CLPI en intervenciones de restauración sobre TIT.

Añadir un párrafo operativo que remita a mecanismos de exigibilidad ante incumplimiento (p. ej., solicitar al Secretariado desarrollar orientación sobre vías de reclamo y remedio).

4. Fortalecer la protección efectiva de derechos colectivos y autogobierno

Qué debe lograrse:

Recuperar la base conceptual del borrador cero y la condición de PICL como sujetos activos, no objeto de gestión. Incorporar indicadores de cumplimiento vinculantes (no solo aspiracionales) sobre autogobierno territorial a los mecanismos de reporte, y condicionar el reconocimiento de contribución a las Metas 2 y 3 a la existencia de garantías efectivas —no meramente formales— de los derechos colectivos.

Enmiendas específicas:

Párr. 5 — restituir la fundamentación biocultural eliminada sin corchetes, o integrarla directamente en el Principio A (párr. 8).

Párrs. 40/41 — revertir el cambio modal de «podrán reconocerse» a «deberían reconocerse» respecto de los modelos de gobernanza de AP.

Párrs. 37/38 — restituir «autónomos» y la construcción en voz activa de PI/CL (hoy en voz pasiva).

Párrs. 32/33 — eliminar «cuando proceda» del reconocimiento de autonomía.

Párr. 25 — reponer íntegramente el párrafo sobre uso consuetudinario (caza, pesca, manejo forestal) eliminado sin corchetes.

Nota de cautela: la propuesta de condicionar el reconocimiento de contribución a las Metas 2 y 3 a garantías efectivas de derechos colectivos no tiene hoy un párrafo, definición o sección del texto que la sostenga. No hay medida de la calidad de las garantías de derechos — solo extensión territorial y gobernanza reconocida. Se hace necesario proponerla como principio operativo nuevo en la Sección III de las directrices.

Una posibilidad de texto para lo propuesto es: Principio [X]. ***Garantías efectivas como condición de reconocimiento***

El reconocimiento de las contribuciones de los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y los pueblos afrodescendientes a la consecución de la Meta 2 y la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal debe fundamentarse en la existencia de garantías efectivas de sus derechos colectivos —incluyendo la tenencia segura de sus territorios, el consentimiento libre, previo e informado y su autogobierno— y no únicamente en su reconocimiento formal o normativo.

5. Incorporación explícita de los Pueblos Afrodescendientes

Qué debe lograrse:

Que el reconocimiento de los Pueblos Afrodescendientes deje de depender de una inclusión tácita bajo «comunidades locales».

Enmiendas específicas:

Consideraciones iniciales — mantener sin corchetes la referencia a la Decisión 16/6.

A lo largo del texto — insertar «Pueblos Afrodescendientes» de forma nominal en toda mención de la fórmula PICL (opción ideal); de no prosperar, mantener y defender la cláusula en corchetes que aclara que «comunidades locales» los incluye (posición de repliegue).

Definición de TIT — añadir mención explícita de las formas de gobernanza territorial afrodescendiente.

Párr. 53 — extender explícitamente la elegibilidad del registro mundial y del indicador a los territorios afrodescendientes.

Párrs. 11 y 34/35 — asegurar mención explícita de los Pueblos Afrodescendientes para cerrar la laguna de CLPI derivada de su ausencia en la fórmula PICL.

6. Principio de no regresión (Principio H)

Qué debe lograrse:

Proponer que las directrices y también otras decisiones en la COP17 adopten explícitamente un principio de no regresión respecto de los avances ya alcanzados con respecto a los derechos de Pueblos Indígenas, Comunidades Locales y Pueblos Afrodescendiente como salvaguarda frente a su erosión en la implementación nacional — particularmente ante los recambios normativos adversos en curso en algunos países.

Enmiendas específicas:

- Sección III — introducir un nuevo Principio H de no regresión respecto de los derechos de PI, PAD y CL, ausente en ambas versiones del texto.
- Extender lenguaje equivalente, en la medida de lo posible, a otras decisiones de COP17 con incidencia en estos derechos (30x30, movilización de recursos).

7. Protección de los TIT frente a restauración no solicitada [Disputa 5]

Qué debe lograrse:

Restituir la presunción de no degradación de los TIT como principio operativo del párr. 21 —no como nota al pie— e invertir la jerarquía actual entre conocimiento tradicional y conocimiento científico en el diseño de la restauración.

Enmiendas específicas:

- Párr. 21 —restituir en el cuerpo del párrafo (no en la nota al pie 11) la presunción de que los TIT «no están necesariamente degradados»; ningún TIT puede ser objeto de intervención de restauración sin evaluación previa— basada en conocimientos tradicionales y conocimiento científico en igualdad de condiciones— que acredite degradación efectiva, y eliminar el calificador «[según proceda]» aplicado al CLPI: toda restauración en TIT requiere CLPI incondicional. (Vincular con Recomendación 3 — CLPI como derecho exigible, Principio D.)
- Párr. 22 — invertir la jerarquía entre conocimientos tradicionales y conocimiento científico para TIT: las técnicas propias de manejo (fuego, rotación, siembra nativa) deben ser el método por defecto de restauración, no una opción subsidiaria.

8. Financiación Directa

Qué debe lograrse:

Asegurar programas de financiación directa para apoyar iniciativas de conservación y restauración, proyectos de planificación espacial y evaluaciones de impacto ambiental dirigidas por los Pueblos Indígenas y las comunidades locales dentro de sus territorios, y que se asegure sin calificantes debilitantes.

Enmiendas específicas:

- Párr 51 – Eliminar condicionantes adicionados: [“según proceda / circunstancias nacionales / legislación nacional].

Sobre la negociaciones

9. Construcción de nuevas alianzas políticas

Qué debe lograrse:

Dado el contexto político adverso en 2026, con recambios de gobierno y reformas regresivas en distintos países de la región, se hace necesario identificar y establecer nuevas alianzas políticas.

Esta recomendación no opera mediante enmienda textual a las directrices — es una acción diplomática paralela a la negociación.

Enmiendas específicas:

• Identificar y establecer contacto bilateral con Estados del Grupo Africano activos en Art. 8(j), países del grupo Países Megadiversos Afines (LMMC) con marcos de tenencia comunitaria fuera de la región andino-amazónica, la Unión Europea y Noruega (aliado financiero ya comprometido con este proceso), y pequeños Estados insulares del Pacífico. Brasil se mantiene como único aliado estructural del bloque original.

10. Evidencia científica como respaldo técnico

Qué debe lograrse:

Dado el contexto político adverso en 2026, priorizar la sistematización y difusión activa de evidencia científica robusta sobre la eficacia de la conservación liderada por PICL, como base técnica de contrapeso frente a posiciones políticas menos protectoras.

Enmiendas específicas:

• Vincular esta demanda a una tarea existente del marco vigente (decisión 16/4, elemento 4.7 — co-producción de conocimiento) o proponer una tarea nueva que solicite al Secretariado y al OSACTT sistematizar y difundir evidencia sobre la eficacia de la conservación liderada por PI/CL/PA como insumo para la implementación y futura revisión de las directrices.



Anexo

Estudios de caso sobre la efectividad de las formas propias de conservación de los Pueblos Indígenas, Pueblos Afrodescendientes y Comunidades Locales.

Para ejemplificar los resultados de conservación alcanzados bajo este enfoque, el presente informe analiza tres casos de estudio con el objetivo de aportar evidencia empírica a la premisa en debate: cómo los TIT contribuyen a la conservación de la biodiversidad, la restauración de ecosistemas y el fortalecimiento de la gobernanza y los derechos territoriales para la implementación de la Meta 3.

Estos casos se desarrollan en diferentes niveles de escala, nacional, subnacional y de cuenca, en Panamá, Bolivia y Colombia, y en distintos ecosistemas estratégicos. El propósito es ofrecer cifras y análisis comparativos concretos que resulten relevantes para la discusión y la toma de decisiones en la COP17, con especial énfasis en temas relacionados con la implementación efectiva del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI); la reducción de la deforestación; la gobernanza territorial; los planes de vida, planes de manejo, monitoreo comunitario y otros sistemas propios de gobernanza; así como la necesidad de continuar con el reconocimiento de los derechos territoriales y la seguridad de la tenencia como estrategias de conservación efectiva.

caso panamá



Panamá: Territorios indígenas, estabilidad forestal y mejores índices de conservación que en áreas protegidas

Escala: Nacional

Ideas Fuerza Caso Panamá:

1. Durante el periodo 2000–2020, la estabilidad boscosa en Panamá fue mayor en los territorios indígenas, incluyendo áreas reconocidas y en proceso de reconocimiento legal, que en las áreas protegidas delimitadas por el Estado panameño. Este dato constituye una evidencia central sobre la efectividad de la conservación basada en derechos.
2. Panamá cuenta con 4.625.670,20 ha de bosque, excluyendo bosque de rastrojo. De esta cobertura, 2.169.170 ha se encuentran registradas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). Por su parte, las comarcas indígenas legalmente reconocidas cuentan con 1.562.400 ha de bosque dentro de sus territorios. Esta cifra corresponde exclusivamente a las comarcas formalmente constituidas y, por tanto, no incluye otras tierras indígenas en proceso de reconocimiento o con formas de ocupación y gobernanza territorial no plenamente legalizadas.
3. En una escala más amplia de análisis, al considerar tanto las tierras indígenas legalizadas como aquellas no legalizadas o en proceso de reconocimiento, los territorios indígenas registraron 1.852.774 ha de bosque estable durante el periodo 2000–2020. Esta diferencia frente a la cifra de bosque en comarcas indígenas se explica porque el análisis de estabilidad forestal incorpora un universo territorial más amplio que el de las comarcas formalmente reconocidas.
4. La pérdida permanente de bosque fue proporcionalmente menor en los territorios indígenas que en las áreas protegidas. Durante el periodo 2000–2020, el área deforestada en territorios indígenas representó el 3,33% de los bosques existentes al inicio del monitoreo, mientras que en las áreas protegidas alcanzó el 5,36%. Esto muestra que la gobernanza indígena tuvo un mejor desempeño relativo en la gestión del bosque y en la prevención de la deforestación.
5. Las áreas intervenidas y posteriormente regeneradas fueron mayores en los territorios indígenas, lo que evidencia un patrón de conservación con uso y recuperación del bosque. En el periodo analizado, estas áreas representaron el 6,98% en territorios indígenas, frente al 2,2% en áreas protegidas. Este dato no debe interpretarse como pérdida permanente de bosque, sino como parte de una dinámica territorial en la que el uso del bosque se combina con procesos de regeneración, planificación y gobernanza.
6. Las áreas protegidas registraron un 49,8% menos bosque estable que las tierras indígenas legalizadas y no legalizadas. Mientras los territorios indígenas conservaron 1.852.774 ha de bosque estable, las áreas protegidas registraron 931.047 ha. En otras palabras, durante el periodo 2000–2020, los territorios indígenas mantuvieron casi el doble de bosque estable que las áreas protegidas.
7. El caso de Panamá muestra que la conservación basada en derechos territoriales indígenas puede producir resultados comparables, e incluso superiores, al modelo clásico de áreas protegidas. La estabilidad forestal observada en estos territorios evidencia la efectividad de sus mecanismos de gobernanza forestal, uso regulado y regeneración ecológica.
8. La alta tasa de efectividad sugiere que, en el caso panameño, la conservación basada en derechos no debe entenderse como una estrategia secundaria o complementaria. Por el contrario, los datos disponibles muestran que los territorios indígenas cumplen una función estructural en la permanencia del bosque, tanto por la superficie que conservan como por sus menores niveles relativos de deforestación.

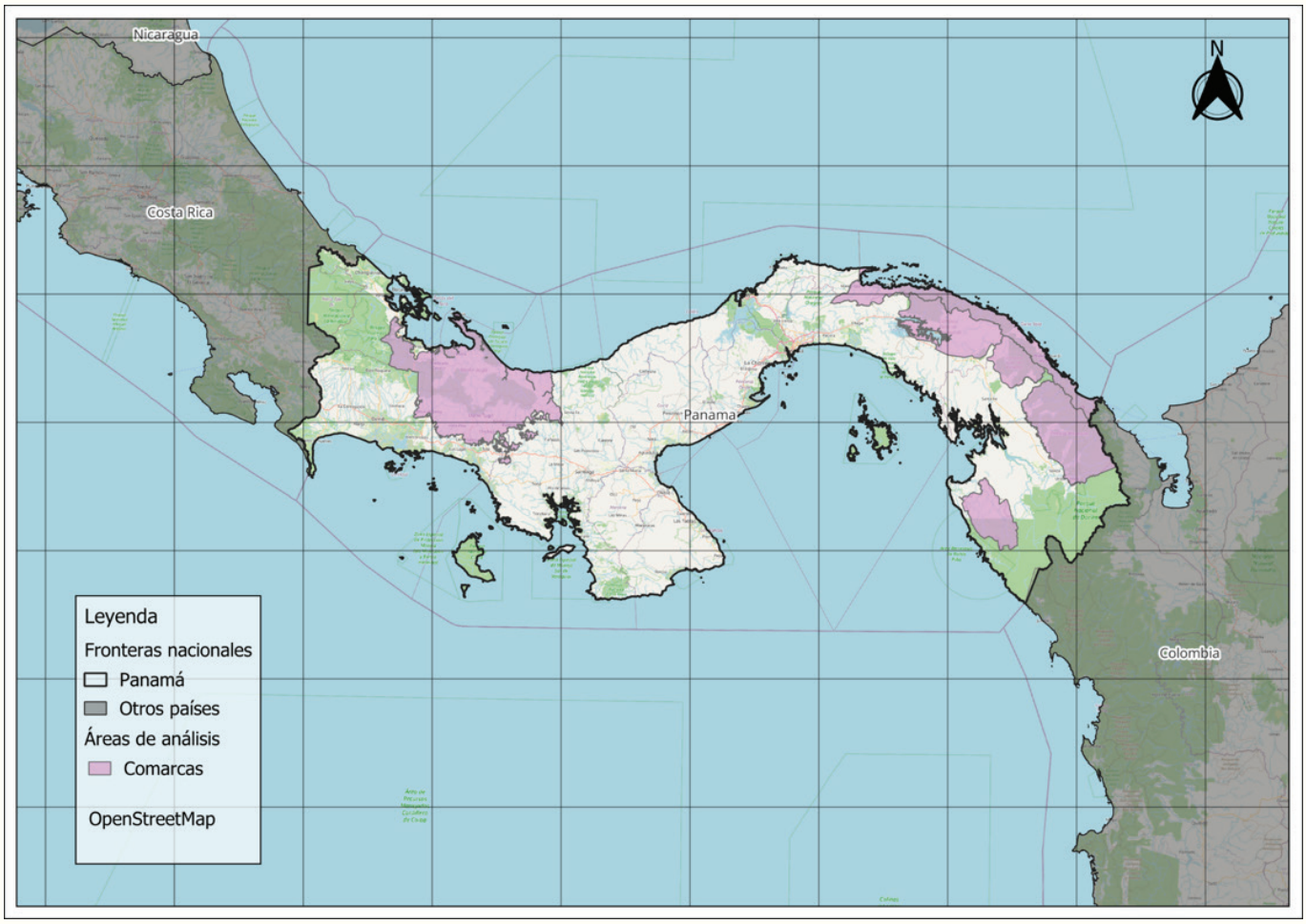
Contexto de los territorios indígenas y áreas protegidas en Panamá:

En Panamá, el reconocimiento de la propiedad colectiva de los Pueblos Indígenas se ha desarrollado principalmente a través de dos figuras especiales: las Comarcas Indígenas y las tierras colectivas indígenas. Ambas buscan proteger territorios tradicionalmente ocupados y encuentran sustento en el marco constitucional panameño, así como en normas específicas, como las leyes comarcales y la Ley 72 de 2008.

Sin embargo, estas figuras no tienen exactamente el mismo alcance. Las Comarcas Indígenas hacen parte de la organización político-administrativa del Estado panameño, mientras que las tierras colectivas indígenas, aunque reconocen derechos de propiedad colectiva, no alcanzan ese mismo nivel de reconocimiento político-administrativo. Esta diferencia es importante, porque permite entender tanto los avances del reconocimiento territorial indígena en Panamá como los rezagos que todavía persisten frente a las solicitudes pendientes de formalización[81].

Actualmente, Panamá cuenta con aproximadamente 1.827.820 ha reconocidas formalmente como propiedad colectiva indígena, lo que representa cerca del 24% del territorio nacional. No obstante, si se resolvieran favorablemente las solicitudes pendientes de formalización, esta superficie podría aumentar hasta representar cerca del 41% del país (Alejo et al. 2025). Esto muestra que el peso territorial de los Pueblos Indígenas en Panamá no solo es significativo, sino que podría ser mucho mayor si se superaran los rezagos institucionales en el reconocimiento de sus derechos territoriales.

Mapa 1. Comarcas indígenas.

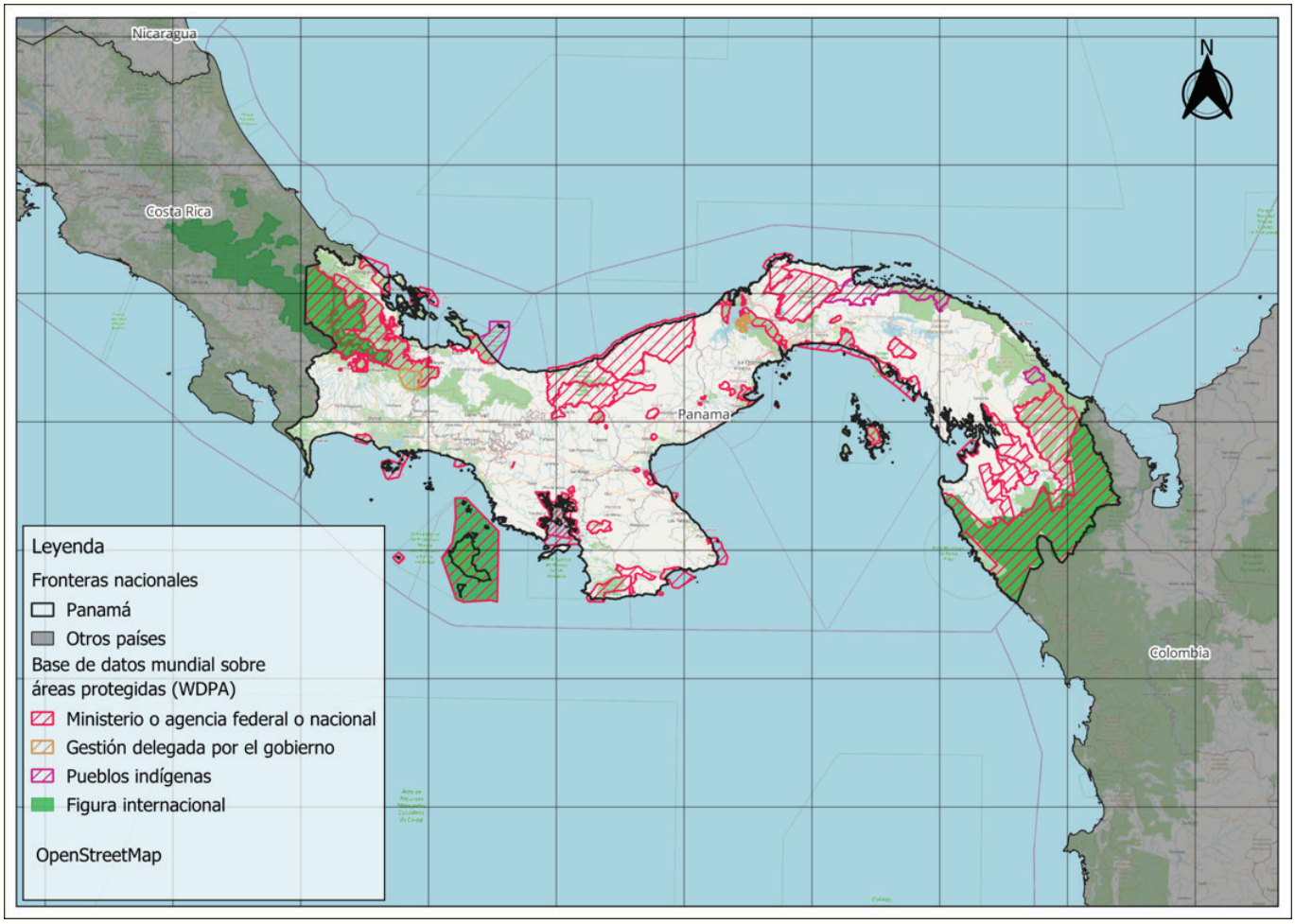


Elaboración propia.

En cuanto a las áreas protegidas delimitadas y registradas dentro del SINAP, Panamá contaba, para 2025, con 121 áreas protegidas. Estas cubren aproximadamente el 33% del área terrestre y el 30,5% de la superficie marina del país. [82]

Dentro de estas áreas, el gobierno panameño ha impulsado actividades de bajo impacto ambiental, como la Estrategia de Turismo, Conservación e Investigación (TCI), desarrollada por el Ministerio de Ambiente y la Autoridad de Turismo de Panamá.[83] Esta apuesta busca combinar conservación, investigación y uso público regulado, especialmente en zonas con alto valor ecológico.

Mapa 2. Áreas protegidas en Panamá.



Elaboración propia.

Sin embargo, la existencia formal de áreas protegidas no garantiza, por sí sola, una conservación efectiva. A pesar de los esfuerzos por promover actividades de bajo impacto, persisten alertas importantes frente a la presión sobre ecosistemas frágiles, tanto marino-costeros como boscosos. Un ejemplo de ello es el cierre del área protegida Isla Escudo de Veraguas-Dego, adoptado por las autoridades debido a la extracción y comercialización de especies endémicas.[84]

Este contexto permite plantear una discusión central: aunque Panamá cuenta con un sistema formal de áreas protegidas amplio y consolidado, los territorios indígenas muestran un papel igualmente estructural, y en algunos casos más efectivo, en la permanencia del bosque y en la conservación de ecosistemas estratégicos.

Cifras y resultados en materia de conservación: el enfoque de derechos; mayor efectividad que el enfoque de la conservación basada en áreas protegidas:

A escala nacional, el caso de Panamá permite observar en estudios longitudinales[85] cómo los cambios negativos en la cobertura de bosque se generaron especialmente en áreas que carecían de la existencia de esquemas de gobernanza territorial vía comunidad étnica o institucionalidad estatal. De forma particular, el algoritmo CODED desarrollado por Alejo et al (2025), basado en imágenes Landsat, identifica conversiones de bosque a no bosque, bosque estable y áreas no forestales. Respecto a las conversiones de bosque CODED logra determinar aquellos ciclos denominados como disturbios forestales, ciclos de transformación cuyo último estadio es la regeneración. Esta distinción es clave para el argumento, porque evita reducir todo cambio de cobertura a pérdida permanente y permite leer mejor los sistemas de uso indígena del bosque.

Los resultados alcanzados evidencian cómo en la ventana temporal de 20 años, las tierras indígenas mantenían 18.537,74 km² de bosque estable, equivalentes a 1.853.774 hectáreas. Esta cifra es casi el doble de la superficie de bosque estable registrada en áreas protegidas, que alcanzaba 9.310,47 km², es decir, 931.047 hectáreas. En términos comparativos, las tierras indígenas conservaban aproximadamente un 99,11% más bosque estable que las áreas protegidas. El estudio es determinante, pues supone que, a escala nacional, la estabilidad forestal no está necesariamente asociada al enclave forestal de las áreas protegidas,[86] por el contrario, que el gran aporte se encuentra en áreas bajo esquemas de reconocimiento de derechos propiedad colectiva de comunidades indígenas.

La lectura confluye con el ejercicio adelantado en el Prisma Report Indigenous Peoples and Governance in Redd+ Readiness in Panama, el cual había logrado evidenciar cómo los territorios indígenas en el país centroamericano logran concentrar una parte significativa de bosques maduros y carbono forestal. PRISMA, retomando estimaciones de Vergara-Asenjo y Potvin, señala que las comarcas y tierras colectivas indígenas cubrían 23.742 km², equivalentes al 31,6% del área terrestre de Panamá, y que en 2008 los territorios indígenas y las áreas protegidas concentran conjuntamente el 77% de los bosques maduros del país. Más aún, los territorios indígenas albergaban aproximadamente 1.754.000 hectáreas de bosque maduro, frente a 725.000 hectáreas en áreas protegidas, y retenían cerca del 54% de los bosques maduros y del 54% de las reservas de carbono forestal de Panamá.[87]

Indicador	Tierras indígenas	Áreas protegidas	Tierras sin esquema de gobernanza estatal o indígena
Bosque estable hasta 2020	1.853.774 ha	931.047 ha	797.377 ha
Deforestación 2000–2020	71.158 ha	54.068 ha	348.277 ha
Deforestación relativa frente al bosque previo a 2000	3.33%	5.36%	27.43%
Disturbio forestal	144.434 ha	22.252 ha	123.836 ha
Disturbio relativo	6.98%	2.2%	9.75%

Fuente: elaboración propia con base en Alejo et al. (2025).

La comparación también resulta significativa cuando se revisan las tasas relativas de deforestación. Entre 2000 y 2020, las tierras indígenas registraron 71.158 hectáreas de deforestación, frente a 54.068 hectáreas en áreas protegidas y 348.277 hectáreas en tierras sin esquemas de gobernanza indígena o protección estatal. Si bien en términos absolutos las áreas protegidas presentan una menor superficie deforestada, la lectura proporcional es más reveladora: respecto al bosque existente antes de 2000, las tierras indígenas perdieron 3,33%, mientras que las áreas protegidas perdieron 5,36% y las otras tierras 27,43%. Esto permite afirmar que, en términos relativos, las tierras indígenas tuvieron un mejor desempeño frente a la deforestación que las áreas protegidas y una diferencia mucho más marcada frente a las tierras sin protección o sin reconocimiento territorial indígena.[88]

El comportamiento del disturbio forestal también debe leerse con cuidado. En las tierras indígenas se identificaron 144.434 hectáreas de disturbios forestales, frente a 22.252 hectáreas en áreas protegidas y 123.836 hectáreas en otras tierras. Sin embargo, este dato no puede ser interpretado automáticamente como degradación irreversible. En la metodología de Alejo et al. (2025), el disturbio forestal refiere a transformaciones temporales que pueden estar seguidas por procesos de regeneración. En esa medida, el dato permite diferenciar entre la conversión permanente del bosque y los sistemas dinámicos de uso territorial, incluyendo prácticas de agricultura itinerante, recolección, movilidad, manejo del bosque y recuperación de coberturas.

Las tierras indígenas no son espacios vacíos ni territorios sin intervención humana. Son territorios usados, habitados, recorridos y manejados, pero bajo sistemas que no necesariamente conducen a la pérdida permanente del bosque. Por eso, el caso panameño permite sostener que la conservación efectiva puede coexistir con formas de vida, producción, movilidad y reproducción cultural. En otras palabras, la permanencia del bosque no depende únicamente de una categoría estatal de conservación, sino también de conocimientos socioecológicos, institucionalidad comunitaria, prácticas y formas de gobernanza territorial.

Ahora bien, a pesar de estos resultados, la situación de los Pueblos Indígenas en Panamá sigue marcada por una deuda histórica en materia de reconocimiento y titulación territorial. El International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) reporta que, según el censo de 2023, la población indígena representa el 17,2% de la población nacional; sin embargo, la formalización plena de sus territorios continúa siendo una demanda pendiente.[89] Esta tensión resulta aún más compleja si se considera que, de acuerdo con PRISMA (2023), cerca del 80% de las tierras titulables bajo la Ley 72 de 2008, norma que permite el reconocimiento de la propiedad colectiva indígena fuera de las comarca, presenta algún tipo de superposición con áreas protegidas.

Este punto es fundamental para la discusión sobre conservación basada en derechos. Por un lado, las áreas protegidas pueden aparecer en los reportes nacionales como avances en materia de conservación. Pero, por otro lado, cuando estas áreas se superponen con territorios indígenas pendientes de titulación, existe el riesgo de que los aportes de la gobernanza indígena queden invisibilizados o subordinados a categorías estatales. En efecto, los resultados de conservación en tierras indígenas no reconocidas pueden terminar siendo absorbidos dentro de las cifras de áreas protegidas o zonas de amortiguación, sin que ello implique reconocimiento de derechos territoriales, autonomía, consentimiento o gobernanza propia.[90]

El aporte de Alejo et al. (2025) respecto a la incorporación de las demarcaciones comunitarias construidas mediante levantamientos colaborativos y cartografía guiada, permite observar con mayor precisión dónde ocurre la conservación efectiva y bajo qué formas de gobernanza territorial se sostiene. En esa medida, el caso panameño ofrece evidencia empírica para afirmar que un enfoque de conservación basado en derechos no solo es una exigencia normativa, sino también una condición ecológicamente relevante: las tierras indígenas mantienen grandes extensiones de bosque estable, presentan menores tasas relativas de deforestación y sostienen sistemas dinámicos de uso que pueden favorecer la regeneración y permanencia del bosque.



caso bolivia

Comparación de tasas de conservación entre 3 figuras de gobernanza: estatal, comanejo e indígena

Escala: Subnacional

Ideas Fuerza Caso Bolivia:

1. Los tres territorios analizados cuentan con alguna figura formal de protección; sin embargo, presentan trayectorias de conservación diferentes. El análisis en Bolivia muestra que el territorio bajo gobernanza indígena registra una ganancia neta de bosque del 0,09 % anual, mientras que el de gobernanza mixta presenta una pérdida moderada y la Reserva Beni, bajo gestión estatal, una pérdida del 19,8 % anual. Estos resultados evidencian diferencias en la efectividad de la conservación, con resultados más favorables en el territorio bajo gobernanza indígena. Así, el caso boliviano aporta evidencia relevante de que la meta 30x30 no debe evaluarse únicamente por las hectáreas protegidas, sino también considerando quién ejerce la gobernanza y cómo se gestiona cada territorio.
2. La Reserva Beni, área protegida estatal sin manejo indígena y de menor superficie (~134.848 ha), perdió el 89% de su bosque firme en el mismo período, a una tasa de -19,8% anual: más de 140 veces la velocidad de pérdida del TIPNIS.
3. A pesar de que la Reserva Beni, área protegida con gobernanza estatal, cuenta con menos área, fue la que presentó mayores niveles de transformación.
4. En este caso, las figuras mixtas o colectivas cuentan con la capacidad de conservar mayores extensiones en área, que las figuras que solo cuentan con un tipo de gobernanza estatal.
5. Existe una brecha entre la gobernanza nominal y la gobernanza efectiva.
6. Este caso de estudio del Norte de la Amazonía boliviana muestra datos y cifras contundentes que se fundamentan en eventos de éxito históricos en materia de Consentimiento Previo, Libre e Informado, reconocimiento de derechos territoriales, gestión en propiedad colectiva y gobernanza indígena.

Contexto de las áreas estudiadas en Bolivia:

Las áreas seleccionadas para este estudio se ubican en el norte de la Amazonía boliviana, en el departamento del Beni, y presentan distintas condiciones de conservación y amenazas. Para el análisis comparativo, realizado a partir de imágenes satelitales proporcionadas por BioMaps Bolivia, se seleccionaron tres figuras de gobernanza: los Territorios Indígenas Originarios Campesinos (TIOC), bajo propiedad colectiva indígena; el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), con un esquema de cogobernanza; y la Reserva de la Biósfera Estación Biológica del Beni, cuya gobernanza corresponde exclusivamente al Ministerio de Ambiente.

Gobernanza tipo Indígena: TIOC Takana-Cavineño

El Territorio Indígena de Origen Campesino (TIOC) de los pueblos Takana y Cavineño se encuentra ubicado en los municipios de Riberalta, Santa Rosa y Exaltación, departamento de Beni. Cuenta con una extensión de 271.049,5 hectáreas, con gobernanza indígena activa. La titularidad colectiva fue consolidada en 2007, garantizando el 93,97% de su territorio original demandado. Siendo un modelo de TIOC, antes Tierra Comunitaria de Origen.[91]

A partir del presente análisis, es el único de los tres territorios que muestra una ganancia neta de bosque firme en el período analizado: El bosque firme se mantiene prácticamente estable a lo largo de la década, con una ganancia neta de +0,87% a lo largo de los años de 2014 hasta 2024, equivalente a una tasa promedio de incremento de +0,09%/año de bosque firme. El crecimiento de la categoría pastizal/matorral (+24,5%) responde a una dinámica de sabana nativa propia de la geografía del territorio (departamentos de La Paz y Pando) y no necesariamente a degradación.[92]

Estos resultados también son consistentes con lo señalado por Pérez y Smith (2019), quienes identifican patrones sostenidos de ganancia forestal en áreas del TIOC Takana-Cavineño. Este comportamiento podría estar relacionado, entre otros factores, con su inserción en un paisaje territorial más amplio, caracterizado por la presencia de áreas gestionadas por pueblos indígenas y comunidades locales. Esta configuración favorece un esquema territorial de protección relativamente continuo, en el que confluyen la conservación de los bosques en pie, las formas propias de gobernanza ambiental y los sistemas de conocimiento y manejo del territorio. En conjunto, estas dinámicas no solo pueden contribuir al mantenimiento e incremento de la cobertura boscosa, sino también al fortalecimiento de las prácticas culturales, los conocimientos tradicionales y las cosmovisiones amazónicas asociadas a estos territorios.

Tabla 1. Análisis de coberturas e índices de cambios de bosque y uso del suelos del Territorio Indígena de Origen Campesino Takana - Cavineño

Indicador	2014	2018	2020	2024
Bosque firme (ha)	143.790	143.526	143.433	145.046
Formación boscosa total (%)	80,1%	82,9%	81,3%	82,7%
Pastura (ha)	957	1.170	1.252	1.634
Grassland/shrubland (ha)	36.165	34.573	38.979	45.037
Territorio	**Gobernanza**	**Superficie (ha)**	**Δ bosque firme**	**Tasa anual (CAGR)**
TIOC Takana-Cavineño	Indígena (TCO)	271.049,5	+0,87%	+0,09%/año

Fuente: Análisis a partir de estadísticas de MapBiomas, 2024a.

Gobernanza mixta indígena: Parque Nacional TIPNIS

El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) combina la figura de TCO, bajo propiedad colectiva indígena, con la de Parque Nacional. Abarca una superficie total de 1.091.656 hectáreas, distribuidas entre los departamentos de Beni y Cochabamba.

El TIPNIS constituye un caso emblemático en Bolivia por la articulación entre la propiedad colectiva indígena y la protección de la biodiversidad. Su trayectoria ha estado marcada por la controversia en torno al proyecto de construcción de la carretera Villa Tunari–San Ignacio de Moxos, así como por las amenazas asociadas a la expansión de actividades extractivas dentro del área protegida. El avance del proyecto vial sin CLPI de los Pueblos Indígenas dio lugar a denuncias y movilizaciones de sus organizaciones, que articularon la defensa de los derechos territoriales con la conservación ambiental. Esta experiencia constituye un referente de movilización indígena frente a las presiones sobre el territorio y de reivindicación del derecho al CLPI.[93]

En cuanto a los cambios en la cobertura vegetal del TIPNIS (ver la tabla 2), los datos muestran que la categoría "Formación boscosa" registró un ligero incremento del 0,65 % entre 2014 y 2024. Sin embargo, este resultado podría explicarse principalmente por la expansión del bosque inundable (+5,71 %), mientras que el bosque firme —más sensible a las presiones antrópicas y de especial relevancia para los hábitats terrestres— experimentó una reducción del 1,40 % de su cobertura durante el mismo período.[94]

Tabla 2. Análisis de coberturas e índices de cambios de bosque y uso de suelos del TIPNIS.

Indicador	2014	2018	2020	2024
Bosque firme (ha)	663.847	667.583	656.728	654.571
Bosque inundable (ha)	267.526	265.568	279.628	282.809
Formación boscosa total (%)	82,5%	82,7%	83,0%	83,1%
Agricultura (ha)	6.532	7.008	7.600	9.526
Territorio	**Gobernanza**	**Superficie (ha)**	**Δ bosque firme**	**Tasa anual (CAGR)**
TIPNIS	Indígena + Parque Nacional (mixta)	1.091.656	-1,40%	-0,14%/año

Fuente: Elaboración propia. Análisis a partir de estadísticas de MapBiomas, 2024b.

Gobernanza Estatal: (sin manejo indígena) Reserva Beni

La Reserva de Biosfera Estación Biológica del Beni fue creada mediante el Decreto Supremo N.º 19191 en 1982. Esta área protegida de gestión estatal no cuenta con un régimen explícito de gestión compartida con algún Territorio Comunitario de Origen indígena, por lo que es gestionada exclusivamente por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo de Bolivia, a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia (SNAP). Se encuentra ubicada en la sabana estacionalmente inundable de los Llanos de Moxos.[95]

A partir del análisis de las áreas, se observa que la tasa anual de formación boscosa también presenta un ligero incremento (+0,93 %). Sin embargo, al desagregar los datos, se identifica un patrón crítico: la superficie de bosque firme disminuyó considerablemente, pasando de 3.742 hectáreas en 2014 a tan solo 412 hectáreas en 2024.[96] Esto representa una pérdida acumulada del 89,0 % de la cobertura de bosque firme entre 2014 y 2024, con una tasa anual compuesta aproximada del -19,8 %. El deterioro se aceleró notablemente durante el período 2020-2024, cuando se registró una reducción del 76,3 % en apenas cuatro años, coincidiendo con el período en que Beni se consolida como una nueva frontera de deforestación en Bolivia.[97]

Tabla 3. Análisis de coberturas e índices de cambios de bosque y uso de suelos de la Reserva de biosfera Estación Biológica del Beni.

Indicador	2014	2018	2020	2024
Bosque firme (ha)	3.742	2.954	1.736	412
Bosque firme (% del territorio)	2,77%	2,19%	1,29%	0,31%
Pastura (ha)	1.629	1.744	1.252	1.634
Grassland/shrubland (ha)	20.756	18.899	20.699	16.039
Territorio	**Gobernanza**	**Superficie (ha)**	**Δ bosque firme**	**Tasa anual (CAGR)**
Reserva Beni	Estatal (sin manejo indígena)	~134.848	-89,0%	-19,8%/año

Fuente: Análisis a partir de estadísticas de MapBiomas, 2024c.

Presiones que convergen en el Norte de la Amazonía boliviana:

En el área de estudio convergen múltiples presiones antrópicas que permiten analizar de manera comparativa las dinámicas de transformación de estos territorios. Entre las variables explicativas consideradas se encuentra la expansión de las áreas destinadas a usos agropecuarios y pasturas. En la Reserva del Beni, caracterizada por un esquema de gobernanza predominantemente estatal, estas áreas pasaron de 1.629 hectáreas en 2014 a 6.174 hectáreas en 2024, lo que representa un incremento aproximado del 279%. En contraste, en los territorios bajo gobernanza indígena, la superficie destinada a pasturas pasó de 957 hectáreas en 2014 a 1.634 hectáreas en 2024, equivalente a un incremento aproximado del 70,7%. Esta diferencia evidencia una expansión considerablemente mayor de los usos agropecuarios en el área bajo gobernanza estatal durante el período analizado.[98]

Un análisis reciente basado en datos de 2025 de Global Forest Watch identifica que la provincia Vaca Díez, en Beni, concentró por sí sola el 14,4% de la pérdida nacional de bosque, y que, a diferencia de provincias de Santa Cruz que muestran señales de reducción reciente, Vaca Díez registra un aumento sostenido durante los últimos tres años, consolidándose como una nueva frontera de deforestación que causa estrés en la conservación de las áreas estudiadas, con especial énfasis y repercusiones en la Reserva Beni.[99]

Cifras y resultados en materia de conservación: comparativa entre figuras de gobernanza:

La comparación entre los tres territorios bolivianos analizados revela un patrón contundente: la gobernanza indígena activa es el factor que mejor explica la efectividad real de conservación forestal, por encima de la superficie protegida o del estatus formal de protección. Para ejemplificar la anterior afirmación se tomaron las 3 áreas propuestas como casos de estudio:

Tabla 4. Análisis comparativo de figuras de gobernanza en cuanto a pérdida boscosa.

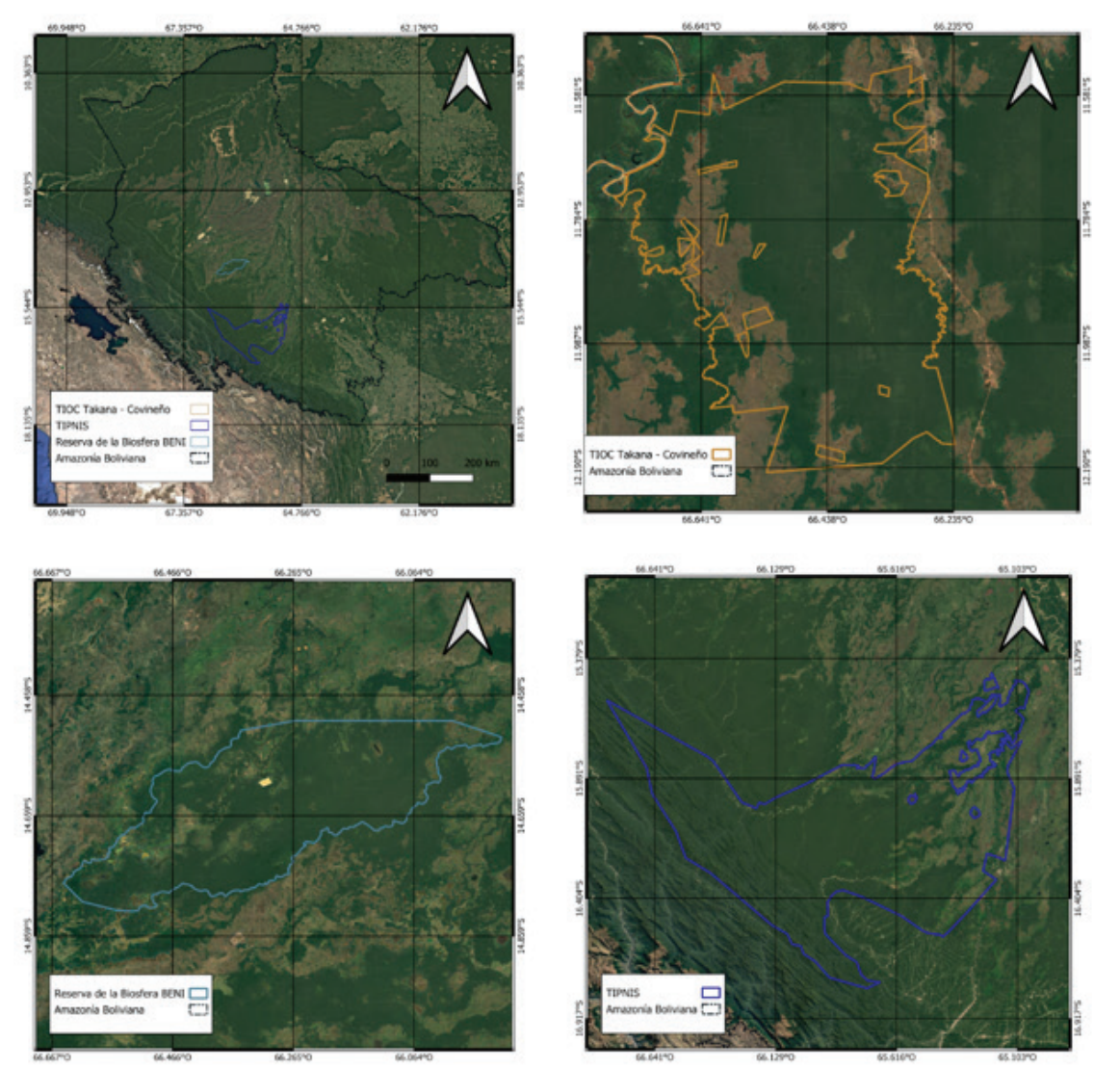
Territorio	Formación boscosa 2014	Formación boscosa 2024	Δ agregado	Δ bosque firme (real)
Takana-Cavineño	80,1%	80,1%	-0,04%	+0,87%
TIPNIS	82,5%	83,1%	+0,65%	-1,40%
Reserva Beni	81,9%	82,7%	+0,93%	-89,0%

Fuente: Elaboración propia. Análisis a partir de estadísticas de MapBiomas, 2024b.

- El TIOC Takana-Cavineño, con gobernanza puramente indígena sobre 271.049,5 hectáreas, es el único de los tres casos que registra una ganancia neta de bosque firme en la última década (+0,87% total; +0,09% anual).
- El TIPNIS, un territorio de gobernanza mixta —indígena y estatal, bajo la figura de Parque Nacional— que abarca más de un millón de hectáreas, presenta, según este análisis, una pérdida leve y contenida de cobertura boscosa (-1,40 % en total y -0,14 % anual), consistente con un manejo territorial que se mantiene activo pese a las presiones externas.
- En contraste, la Reserva Beni, un área protegida de gestión puramente estatal sin componente de manejo indígena y con apenas ~134.848 hectáreas, ha presentado una pérdida del -89,0% de su bosque firme, a una tasa compuesta de -19,8% anual: una velocidad de pérdida más de 140 veces superior a la del TIPNIS.

La evidencia cuantitativa presentada en este informe sustenta que, en el contexto boliviano, la efectividad real de conservación forestal está más asociada al modelo de gobernanza territorial que a la mera existencia de una figura de protección formal. Los territorios indígenas con gobernanza activa (TIPNIS y TIOC Takana-Cavineño) mostraron estabilidad o ganancia neta de bosque firme entre 2014 y 2024. En contraste, la Reserva del Beni, un área protegida de gestión estatal sin un componente de manejo indígena formalmente constituido y reconocido, experimentó una disminución considerable de su cobertura boscosa, documentada tanto por los datos de este estudio como por fuentes independientes.[100]

Mapa 3. Composición de mapas de Caso de Estudio.



Fuente: Elaboración propia.



caso colombia

El caso del Consejo Comunitario de Yurumanguí: resultados verificables desde el ejercicio de la autoridad tradicional y la autonomía de los pueblos negros y afrodescendientes

Escala: Cuenca

1. El caso del Consejo Comunitario de Yurumanguí muestra que la titulación colectiva de comunidades negras no solo tiene un efecto jurídico en materia de reconocimiento territorial, sino también un efecto ambiental verificable. La existencia de un título colectivo sobre 54.776 ha, ha permitido fortalecer la autoridad propia, ordenar el uso del territorio y sostener altos niveles de conservación en una subcuenca estratégica.
2. Yurumanguí conserva el modelo de titulación colectiva por cuenca, propio de los primeros años de implementación de la Ley 70 de 1993. Esto es relevante porque el territorio no fue reconocido como un polígono aislado, sino como una unidad socioecológica compuesta por río, bosque húmedo tropical, manglar, zonas de bajamar, estuarios y costa marítima.
3. El Consejo Comunitario cuenta con la titulación colectiva del 83,2% de la cuenca del río Yurumanguí. Esta cifra permite mostrar que el reconocimiento jurídico de la propiedad colectiva cubre una parte sustancial del sistema territorial y ecológico de la comunidad, lo que fortalece su capacidad de gobernanza, control y planificación del territorio.
4. A pesar de las presiones derivadas del conflicto armado, los cultivos de uso ilícito, la minería ilegal y la explotación ilegal de madera, el 96% del territorio colectivo del Río Yurumanguí correspondía a bosques naturales, incluyendo bosques, manglares y zonas de transición como estuarios. Este dato constituye una evidencia central sobre la efectividad de la conservación ejercida desde la autoridad tradicional afrodescendiente.
5. El caso del Consejo Comunitario de Yurumanguí muestra que la conservación basada en derechos no implica la transformación de prácticas tradicionales, sino reconocer sus formas propias de uso, manejo y regulación. La comunidad ha mantenido prácticas tradicionales como la pesca, la agricultura, el uso del bosque y la minería ancestral, sin que estas formas de vida hayan derivado en una pérdida generalizada de cobertura natural.
6. La comparación con el Parque Nacional Natural Farallones de Cali refuerza el argumento. Mientras el área protegida colindante ha enfrentado afectaciones graves por minería ilegal y pérdida de vegetación natural, Yurumanguí mantiene altos niveles de conservación bajo un esquema de propiedad colectiva y gobierno propio. Esto muestra que la declaratoria estatal de área protegida no garantiza por sí sola mejores resultados ambientales.
7. El caso de Yurumanguí permite afirmar que la propiedad colectiva de comunidades negras puede producir resultados ambientales comparables, e incluso más sólidos, que los modelos clásicos de conservación centrados exclusivamente en áreas protegidas. La diferencia está en que aquí la conservación no se produce por exclusión, sino por permanencia, autoridad territorial, control comunitario y defensa colectiva del bosque, el río y el manglar. El título colectivo ha permitido sostener el buen vivir, las formas tradicionales de uso y la permanencia de un sistema socioecológico altamente conservado.

La titulación colectiva de comunidades negras, un derecho con un efecto ambiental.

Con la promulgación de la Constitución de 1991 en Colombia, se abrió un camino para el reconocimiento de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros como sujetos de especial protección. Años después, con el robustecimiento del bloque de constitucionalidad, el desarrollo de la Ley 70 de 1993 y, posteriormente, el Decreto 1745 de 1995, decreto que reglamentó el capítulo tercero de dicha ley, inició un extenso camino para el reconocimiento de la propiedad colectiva, mediante títulos a los consejos comunitarios, como órgano político-administrativo de las comunidades negras.

Los primeros años de implementación de la Ley 70 y el proceso de titulación desarrollado mediante el Decreto 1745 de 1995 enfocaron sus esfuerzos en la titulación de cuencas en las zonas del Pacífico colombiano. Este contexto respondió al esfuerzo por proteger los ecosistemas inmersos en la zona del Chocó biogeográfico. En efecto, las políticas ambientales, durante la segunda mitad de los años noventa y la primera mitad de la década de los 2000, estuvieron articuladas a la consolidación de un modelo de conservación basado en derechos para ciertas zonas del país, en donde la política de titulación colectiva fue fundamental.[101]

Tras 33 años desde la sanción de la Ley 70 de 1993, los esfuerzos del Gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez permitieron el desarrollo de nuevos instrumentos normativos, como el Decreto 0129 de 2024, ampliando los mecanismos para la protección de tierras, dentro de las cuales se encuentran ecosistemas estratégicos. Actualmente, Colombia ha logrado titular 303 consejos comunitarios, con un área de 5.725.040 ha, en 17 departamentos. A pesar del esfuerzo, actualmente continúan sin ser atendidas 744 solicitudes de titulación colectiva, exponiendo a las comunidades negras y afrodescendientes a graves estadios de despojo.[102]

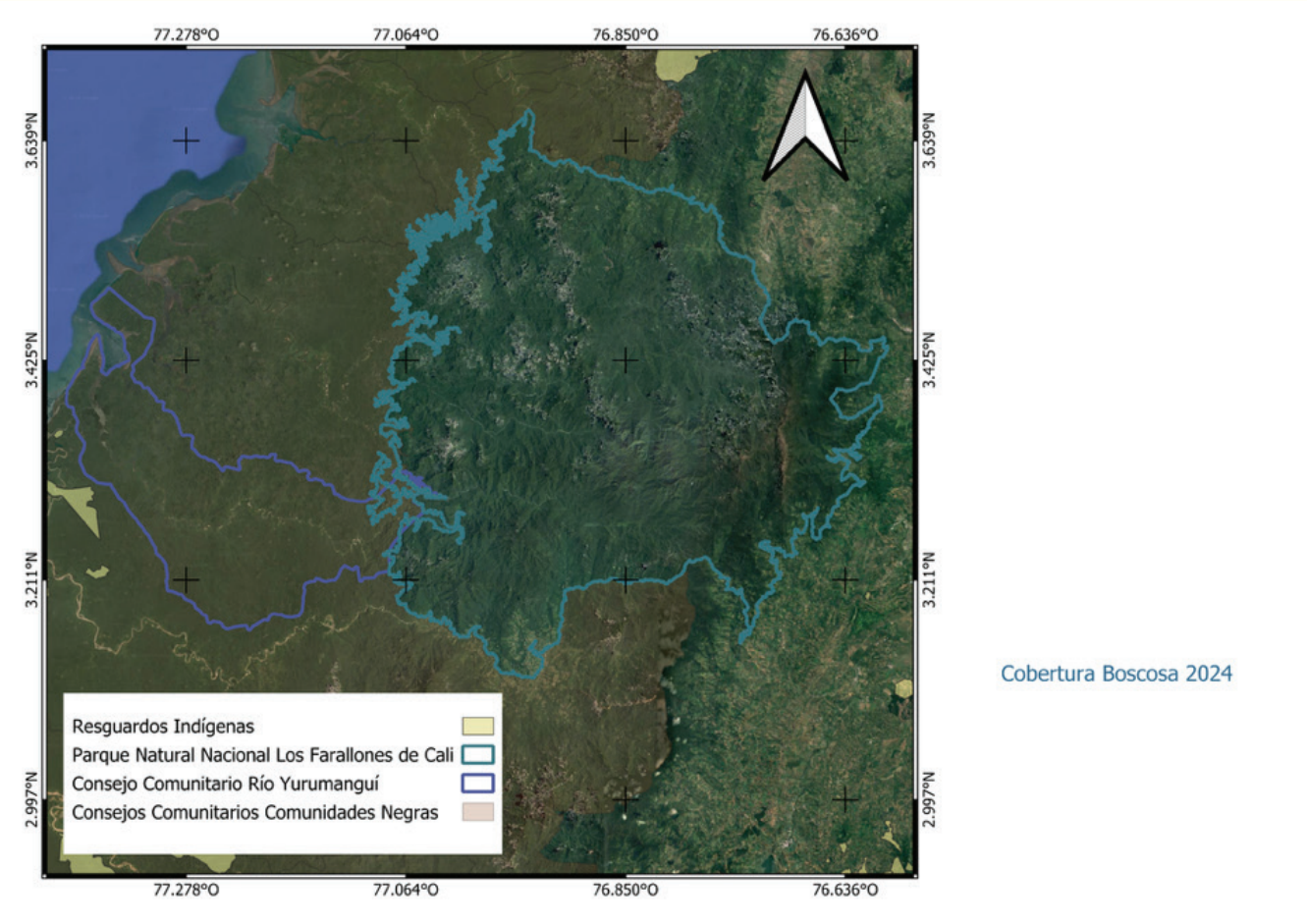
La conservación de bosques dentro de títulos colectivos de comunidades negras alcanza un margen entre 94,32% y 73,33%, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible[103] y el reporte del Instituto Humboldt. No obstante, la variación porcentual responde a la inclusión de bosque húmedo tropical y diversos tipos de capas boscosas, lo que genera una variación en el cálculo. En todo caso, la cifra se encuentra entre 5.400.000 y 4.034.778ha.[104] La actualización de este dato, estimado mediante la metodología del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC), indica que, a 2024, el 58% de los bosques de Colombia se encontraban dentro de territorios colectivos de comunidades negras, resguardos indígenas y zonas de reserva campesina.[105] Esta evidencia también coincide con estudios recientes que muestran que las tierras afrodescendientes reconocidas en Sudamérica se encuentran asociadas a zonas de alto valor para la biodiversidad y el carbono, y presentan reducciones significativas de pérdida de bosque frente a sitios comparables.[106]

Consejo Comunitario de Yurumanguí:

Ubicado en el suroccidente del departamento del Valle del Cauca, en la zona rural del Distrito de Buenaventura, el Consejo Comunitario de Yurumanguí cuenta con un área titulada colectivamente de 54.776 hectáreas desde el 24 de noviembre de 1999, conservando el modelo de titulación por cuenta del primer momento de implementación de la Ley 70 de 1993. El consejo comunitario ha estructurado su esquema de ordenamiento territorial bajo la distribución de tres zonas, compuestas por 12 veredas, las cuales manejan vocaciones productivas diferentes.[108]

El Consejo Comunitario de Yurumanguí cuenta con la titulación colectiva del 83,2% de la totalidad de la cuenca del río Yurumanguí, en un mosaico de bosque húmedo tropical, manglar y costa marítima, además de colindar con el Parque Nacional Natural Farallones de Cali.

Mapa 4. Título colectivo Yurumanguí y PNN los Farallones de Cali



A pesar de las presiones a las que el Consejo Comunitario se enfrenta por cuenta de la presencia de actores armados que han buscado promover la expansión de cultivos de uso ilícito, minería ilegal y explotación ilegal de madera, la administración y gobernanza del territorio adelantada por las autoridades tradicionales del consejo el 96% del territorio colectivo del Río Yurumanguí correspondía a bosques naturales, incluyendo bosques marinos como manglares y zonas de transición como estuarios.[109]

El alto nivel de conservación de la cobertura natural de bosques, manglares, estuarios y zonas de bajamar, producto de la titulación colectiva de estas tierras, ha devenido en resultados más efectivos que los modelos clásicos de conservación centrados exclusivamente en áreas protegidas. En efecto, el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, colindante con el Consejo Comunitario de Yurumanguí, perdió un total de 1.700 hectáreas de vegetación natural, equivalente al 38% de su área más vulnerable, especialmente en zonas de páramo, con 1.000 hectáreas afectadas por presión de la minería ilegal y la deforestación.[110]

Los efectos positivos en materia de conservación y del ejercicio de la gobernanza territorial no sólo contrastan con las afectaciones y la degradación del parque natural colindante, sino que además tienen la particularidad del paralelismo presente entre conservar las formas de uso tradicionales y, aun así, alcanzar resultados efectivos. El Consejo Comunitario de Yurumanguí tiene dentro de sus prácticas tradicionales la realización de minería tradicional y ancestral, minería que genera mínimos impactos al no utilizar precursores químicos, mecanismos motorizados o formas de alto impacto. Por el contrario, la comunidad ha logrado mantener el ejercicio de dicha práctica sin afectar el cuerpo de agua, cuerpo con el cual se tiene una relación constitutiva con el sujeto colectivo afrodescendiente.

Es precisamente dicha relación, y la extensión del cuerpo social colectivo al sistema socioecológico, lo que ha permitido que el Consejo Comunitario de Yurumanguí pueda contener las presiones de los actores externos ilegales y armados que buscan transformar su territorio. La actividad productiva de la comunidad no se ha visto interrumpida por el título colectivo; por el contrario, este ha facilitado el ejercicio de su buen vivir y de sus formas de vida.

Notas

[1] Este informe fue preparado por Almeida Dohrn Consultoría para la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI). La autoría del informe corresponde a Fernanda Almeida, con el apoyo técnico de Ana Tossigen y Cristiam Guerrero. Los estudios de caso fueron elaborados por Cristiam Guerrero y revisados por Fernanda Almeida.

[2] Decisión 16/4, Programme of work on Article 8(j) and other provisions of the Convention on Biological Diversity related to indigenous peoples and local communities to 2030 (en español: Programa de trabajo sobre el artículo 8 j) y otras disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica relacionadas con los Pueblos Indígenas y las comunidades locales hasta 2030). https://www.cbd.int/doc/c/e81e/f8b6/b3549682c1f019900b03e1e7/COP16-l-05-es.pdf

[3] Convenio sobre la Diversidad Biológica, Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Propuesta de elementos para las directrices relacionadas con las tareas 1.1 y 1.2 del programa de trabajo hasta 2030 sobre el artículo 8 j) y otras disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica relativas a los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, Documento del Órgano Subsidiario sobre el Artículo 8(j) y Otras Disposiciones, CBD/SB8J/1/4 (Montreal: Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 6 de agosto de 2025), https://www.cbd.int/doc/c/f2c2/594d/0789057202da07ad87dc5b96/sb8j-01-04-en.pdf.

[4] Convenio sobre la Diversidad Biológica, Órgano Subsidiario sobre el Artículo 8 j) y Otras Disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica Relativas a los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales, Recomendación 1/3: Elementos propuestos para las directrices relacionadas con las tareas 1.1 y 1.2 del programa de trabajo hasta 2030 sobre el artículo 8 j) y otras disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica relativas a los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, CBD/SB8J/REC/1/3 (Montreal, Canadá, 30 de octubre de 2025), https://www.cbd.int/doc/recommendations/sb8j-01/sb8j-01-rec-03-en.pdf.

[5] FIIB, Ministerio de Pueblos Indígenas de Brasil, FUNAI, APIB, COIAB, RIB, RMIB-LAC. "Taller Internacional sobre Territorios Indígenas y Tradicionales (ITTs) y Conservación de la Biodiversidad — Reporte Final", pp. 65–88. Manaos, Brasil, 2–5 de septiembre de 2025 (versión oficial, octubre de 2025). A estas posiciones se sumó la perspectiva particular de los pueblos afrodescendientes, conocida en el contexto de las negociaciones de la COP16 en Cali y actualizada en reuniones entre la autora y representantes de organizaciones representativas, en especial CITAFRO.

[6] Garnett, S. T., Burgess, N. D., Fa, J. E., Fernández-Llamazares, Á., Molnár, Z., Robinson, C. J., Watson, J. E. M., Zander, K. K., Austin, B., Brondízio, E. S., Collier, N. F., Duncan, T., Ellis, E., Geyle, H., Jackson, M. V., Jonas, H., Malmer, P., McGowan, B., Sivongxay, A., & Leiper, I. (2018). A spatial overview of the global importance of Indigenous lands for conservation. Nature Sustainability, 1(7), 369–374. https://doi.org/10.1038/s41893-018-0100-6; WWF, UNEP-WCMC, SGP/ICCA-GSI, LM, TNC, CI, WCS, EP, ILC-S, CM, IUCN, & RRI. (2021). The state of Indigenous Peoples' and Local Communities' lands and territories: A technical review of the state of Indigenous Peoples' and Local Communities' lands, their contributions to global biodiversity conservation and ecosystem services, the pressures they face, and recommendations for actions. WWF.; Rights and Resources Initiative. (2018). A global baseline of carbon storage in collective lands. Rights and Resources Initiative.

[7] Oldekop, J. A., Holmes, G., Harris, W. E., & Evans, K. L. (2016). A global assessment of the social and conservation outcomes of protected areas. Conservation Biology, 30(1), 133–141. https://doi.org/10.1111/cobi.12568; Rights and Resources Initiative, Forest Peoples Programme, & ICCA Consortium. (2025). Enabling pathways for rights-based community-led conservation. Rights and Resources Initiative, Forest Peoples Programme, and ICCA Consortium. https://doi.org/10.53892/JVXN6355

[8] CDB, Decisión 16/6, "Role of people of African descent, comprising [collectives] embodying traditional lifestyles in the implementation of the Convention on Biological Diversity". CBD/COP/DEC/16/6. Cali, Colombia, 1 de noviembre de 2024.

[9] El bloque de Estados con reconocimiento constitucional de territorios indígenas y afrodescendientes enfrenta, de cara a Nairobi y la COP17, retrocesos políticos que debilitan su cohesión previsible. En Colombia, el candidato de derecha Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) ganó la segunda vuelta del 21 de junio de 2026 y asume el 7 de agosto de 2026 —días antes del diálogo informal de Nairobi—, sucediendo a un gobierno de Gustavo Petro que había sido la voz más activa en la SB8j-1 a favor del reconocimiento de los pueblos afrodescendientes. En Perú, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) ganó en junio de 2026 sobre Roberto Sánchez (Juntos por el Perú); Fuerza Popular no ha priorizado históricamente la consulta previa ni el reconocimiento territorial indígena. En Bolivia, el gobierno de Rodrigo Paz —que en octubre de 2025 puso fin a veinte años de gobiernos del MAS— promulgó en abril de 2026 la Ley 1720 de tierras, rechazada por organizaciones indígenas y campesinas por beneficiar al agronegocio y facilitar la deforestación; la norma motivó una marcha indígena de 28 días hasta La Paz y movilizaciones que en mayo-junio de 2026 llegaron a exigir la renuncia del presidente. En Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa impulsa en 2026 una reforma minera y energética que elimina la consulta previa como requisito y sustituye las licencias ambientales por autorizaciones simplificadas. Surinam sigue siendo el único país sudamericano sin una ley que formalice los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas y afrodescendientes, pese a la sentencia de 2007 de la Corte Interamericana sobre el pueblo saamaka. De los seis países que, durante las negociaciones, componían el grupo de aliados, solo Brasil conserva, por ahora, un gobierno favorable al reconocimiento de los TIT —y su continuidad depende de la elección presidencial del 4 de octubre de 2026 (segunda vuelta eventual el 25 de octubre), celebrada dentro de la propia ventana de la COP17 (19–30 de octubre); las encuestas de mediados de 2026 muestran a Lula da Silva liderando sin mayoría de primera vuelta frente a Flávio Bolsonaro.

[10] Decisión 16/4, Programme of work on Article 8(j) and other provisions of the Convention on Biological Diversity related to indigenous peoples and local communities to 2030 (en español: Programa de trabajo sobre el artículo 8 j) y otras disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica relacionadas con los Pueblos Indígenas y las comunidades locales hasta 2030). https://www.cbd.int/doc/c/e81e/f8b6/b3549682c1f019900b03e1e7/COP16-l-05-es.pdf

[11] Convenio sobre la Diversidad Biológica, Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Propuesta de elementos para las directrices relacionadas con las tareas 1.1 y 1.2 del programa de trabajo hasta 2030 sobre el artículo 8 j) y otras disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica relativas a los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, Documento del Órgano Subsidiario sobre el Artículo 8(j) y Otras Disposiciones, CBD/SB8J/1/4 (Montreal: Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 6 de agosto de 2025), https://www.cbd.int/doc/c/f2c2/594d/0789057202da07ad87dc5b96/sb8j-01-04-en.pdf.

[12] Convenio sobre la Diversidad Biológica, Órgano Subsidiario sobre el Artículo 8 j) y Otras Disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica Relativas a los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales, Recomendación 1/3: Elementos propuestos para las directrices relacionadas con las tareas 1.1 y 1.2 del programa de trabajo hasta 2030 sobre el artículo 8 j) y otras disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica relativas a los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, CBD/SB8J/REC/1/3 (Montreal, Canadá, 30 de octubre de 2025), https://www.cbd.int/doc/recommendations/sb8j-01/sb8j-01-rec-03-en.pdf.

[13] FIIB, Ministerio de Pueblos Indígenas de Brasil, FUNAI, APIB, COIAB, RIB, RMIB-LAC. "Taller Internacional sobre Territorios Indígenas y Tradicionales (ITTs) y Conservación de la Biodiversidad — Reporte Final", pp. 65–88. Manaos, Brasil, 2–5 de septiembre de 2025 (versión oficial, octubre de 2025). A estas posiciones se sumó la perspectiva particular de los pueblos afrodescendientes, conocida en el contexto de las negociaciones de la COP16 en Cali y actualizada en reuniones entre la autora y representantes de organizaciones representativas, en especial CITAFRO.

[14] United Nations Environment Programme (UNEP). Limiting Overshoot: Navigating Exceedance of 1.5°C and Pathways towards Return. Nairobi: United Nations Environment Programme, 2026. https://www.unep.org/resources/limiting-overshoot-navigating-exceedance. Veáse también World Meteorological Organization. (2025). WMO confirms 2024 as the warmest year on record at about 1.55°C above pre-industrial levels. World Meteorological Organization.

[15] Organización Meteorológica Mundial. (2025). WMO confirms 2024 as warmest year on record at about 1.55°C above pre-industrial level. World Meteorological Organization.

[16] IPBES. (2019). Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. IPBES Secretariat. https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673

[17] Convenio sobre la Diversidad Biológica. (2020). Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica 5. Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

[18] Convenio sobre la Diversidad Biológica. (2026). Primer borrador del informe global de progreso colectivo sobre la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

[19] Watson, J. E. M., Venter, O., Lee, J., Jones, K. R., Robinson, J. G., Possingham, H. P., & Allan, J. R. (2018). Protect the last of the wild. Nature, 563(7729), 27–30. https://doi.org/10.1038/d41586-018-07183-6; Dinerstein, E., Joshi, A. R., Vynne, C., Lee, A. T. L., Pharand-Deschênes, F., França, M., Fernando, S., Birch, T., Burkart, K., Asner, G. P., & Olson, D. (2020). A "Global Safety Net" to reverse biodiversity loss and stabilize Earth's climate. Science Advances, 6(36), eabb2824. https://doi.org/10.1126/sciadv.abb2824; Garnett, S. T., Burgess, N. D., Fa, J. E., Fernández-Llamazares, Á., Molnár, Z., Robinson, C. J., Watson, J. E. M., Zander, K. K., Austin, B., Brondízio, E. S., Collier, N. F., Duncan, T., Ellis, E., Geyle, H., Jackson, M. V., Jonas, H., Malmer, P., McGowan, B., Sivongxay, A., & Leiper, I. (2018). A spatial overview of the global importance of Indigenous lands for conservation. Nature Sustainability, 1(7), 369–374. https://doi.org/10.1038/s41893-018-0100-6

[20] Berkes, F., Colding, J., & Folke, C. (2000). Rediscovery of traditional ecological knowledge as adaptive management. Ecological Applications, 10(5), 1251–1262. https://doi.org/10.1890/1051-0761(2000)010[1251:ROTEKA]2.0.CO;2; Brondízio, E. S., Gavin, M. C., Siani, S. M. O., Lertzman, K., Le Tourneau, F. M., Fernández-Llamazares, Á., Bates, P., Carino, J., Kawai, A., McElwee, P., Reyes-García, V., Scaramuzzi, I., Shrestha, U. B., & Tugendhat, H. (2021).

Locally based, regionally manifested, and globally relevant: Indigenous and local knowledge, values, and practices for nature. Annual Review of Environment and Resources, 46, 481–509. https://doi.org/10.1146/annurev-environ-012220-012127; Fa, J. E., Watson, J. E. M., Leiper, I., Potapov, P., Evans, T. D., Burgess, N. D., Molnár, Z., Fernández-Llamazares, Á., Duncan, T., Wang, S., Austin, B. J., Jonas, H., Robinson, C. J., Malmer, P., Zander, K. K., Jackson, M. V., Ellis, E., Brondízio, E. S., & Garnett, S. T. (2020). Importance of Indigenous Peoples' lands for the conservation of intact forest landscapes. Frontiers in Ecology and the Environment, 18(3), 135–140. https://doi.org/10.1002/fee.2148

[21] La hifenación es deliberada: comunidad remite al sujeto colectivo con autoridad, normas y reciprocidad propias; territorio, al espacio apropiado y significado, material y simbólico, que el derecho internacional reconoce como "totalidad del hábitat" ; y territorialidad, a la práctica de ocupar, usar, controlar e identificarse con ese espacio , expresada en cosmografías, memoria y reglas de manejo . Ninguno se deriva de los otros —hay territorios titulados sin territorialidad efectiva —, y es su sostén mutuo, no la sola condición espacial, lo que explica el desempeño documentado.

[22] Berkes, F., Colding, J., & Folke, C. (2000). Rediscovery of traditional ecological knowledge as adaptive management. Ecological Applications, 10(5), 1251–1262. https://doi.org/10.1890/1051-0761(2000)010[1251:ROTEKA]2.0.CO;2; Garnett, S. T., Burgess, N. D., Fa, J. E., Fernández-Llamazares, Á., Molnár, Z., Robinson, C. J., Watson, J. E. M., Zander, K. K., Austin, B., Brondízio, E. S., Collier, N. F., Duncan, T., Ellis, E., Geyle, H., Jackson, M. V., Jonas, H., Malmer, P., McGowan, B., Sivongxay, A., & Leiper, I. (2018). A spatial overview of the global importance of Indigenous lands for conservation. Nature Sustainability, 1(7), 369–374. https://doi.org/10.1038/s41893-018-0100-6; Schuster, R., Germain, R. R., Bennett, J. R., Reo, N. J., & Arcese, P. (2019). Vertebrate biodiversity on Indigenous-managed lands in Australia, Brazil, and Canada equals that in protected areas. Environmental Science & Policy, 101, 1–6. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.07.002

[23] Berkes, F., Colding, J., & Folke, C. (2000). Rediscovery of traditional ecological knowledge as adaptive management. Ecological Applications, 10(5), 1251–1262. https://doi.org/10.1890/1051-0761(2000)010[1251:ROTEKA]2.0.CO;2

[24] Garnett, S. T., Burgess, N. D., Fa, J. E., Fernández-Llamazares, Á., Molnár, Z., Robinson, C. J., Watson, J. E. M., Zander, K. K., Austin, B., Brondízio, E. S., Collier, N. F., Duncan, T., Ellis, E., Geyle, H., Jackson, M. V., Jonas, H., Malmer, P., McGowan, B., Sivongxay, A., & Leiper, I. (2018). A spatial overview of the global importance of Indigenous lands for conservation. Nature Sustainability, 1(7), 369–374. https://doi.org/10.1038/s41893-018-0100-6

[25] WWF, UNEP-WCMC, SGP/ICCA-GSI, LM, TNC, CI, WCS, EP, ILC-S, CM, IUCN, & RRI. (2021). The state of Indigenous Peoples' and Local Communities' lands and territories: A technical review of the state of Indigenous Peoples' and Local Communities' lands, their contributions to global biodiversity conservation and ecosystem services, the pressures they face, and recommendations for actions. WWF.

[26] Rights and Resources Initiative. (2018). A global baseline of carbon storage in collective lands. Rights and Resources Initiative; Fa, J. E., Watson, J. E. M., Leiper, I., Potapov, P., Evans, T. D., Burgess, N. D., Molnár, Z., Fernández-Llamazares, Á., Duncan, T., Wang, S., Austin, B. J., Jonas, H., Robinson, C. J., Malmer, P., Zander, K. K., Jackson, M. V., Ellis, E., Brondízio, E. S., & Garnett, S. T. (2020). Importance of Indigenous Peoples' lands for the conservation of intact forest landscapes. Frontiers in Ecology and the Environment, 18(3), 135–140. https://doi.org/10.1002/fee.2148; WWF, UNEP-WCMC, SGP/ICCA-GSI, LM, TNC, CI, WCS, EP, ILC-S, CM, IUCN, & RRI. (2021). The state of Indigenous Peoples' and Local Communities' lands and territories: A technical review of the state of Indigenous Peoples' and Local Communities' lands, their contributions to global biodiversity conservation and ecosystem services, the pressures they face, and recommendations for actions. WWF.

[27] Schleicher, J., Peres, C. A., Amano, T., Llactayo, W., & Leader-Williams, N. (2017). Conservation performance of different conservation governance regimes in the Peruvian Amazon. Scientific Reports, 7, 11318. https://doi.org/10.1038/s41598-017-10736-w; Qin, Y., Xiao, X., Liu, F., de Sa e Silva, F., Shimabukuro, Y., Arai, E., & Fearnside, P. M. (2023). Forest conservation in Indigenous territories and protected areas in the Brazilian Amazon. Nature Sustainability, 6, 295–305. https://doi.org/10.1038/s41893-022-01018-z

[28] Sze, J. S., Childs, D. Z., Carrasco, L. R., Fernández-Llamazares, Á., Garnett, S. T., & Edwards, D. P. (2024). Indigenous Peoples' Lands are critical for safeguarding vertebrate diversity across the tropics. Global Change Biology, 30(1), e16981. https://doi.org/10.1111/gcb.16981

[29] Oldekop, J. A., Holmes, G., Harris, W. E., & Evans, K. L. (2016). A global assessment of the social and conservation outcomes of protected areas. Conservation Biology, 30(1), 133–141. https://doi.org/10.1111/cobi.12568

[30] Oldekop, J. A., Holmes, G., Harris, W. E., & Evans, K. L. (2016). A global assessment of the social and conservation outcomes of protected areas. Conservation Biology, 30(1), 133–141. https://doi.org/10.1111/cobi.12568; Rights and Resources Initiative, Forest Peoples Programme, & ICCA Consortium. (2025). Enabling pathways for rights-based community-led conservation. Rights and Resources Initiative, Forest Peoples Programme, and ICCA Consortium. https://doi.org/10.53892/JVXN6355.

[31] David-Chavez, D. M., Gavin, M. C., Ortiz, N., Valdez, S., & Russo Carroll, S. (2024). A values-centered relational science model: Supporting Indigenous rights and reconciliation in research. Ecology and Society, 29(2), 11. https://doi.org/10.5751/ES-14768-290211

[32] Convenio sobre la Diversidad Biológica. (2022). Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Decisión 15/4. Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

[33] Los conflictos entre pueblos y comunidades indígenas y la administración de áreas protegidas (AP) en América Latina responden a patrones estructurales de larga data, hoy agravados por nuevas dinámicas de crimen organizado y extractivismo. Por ejemplo, la creación de los Parques Nacionales Naturales Tuparro y Katíos (Colombia) derivó en desplazamiento de población local. En la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas (Bolivia, pueblos mosetén y tsimane) la gestión ha generado conflictos por el control de recursos y oposición de élites municipales a las restricciones de uso (Márquez Guerra, J. F., 2016, "Reglamentos indígenas en áreas protegidas de Bolivia: el caso del Pilón Lajas", Revista de Derecho, Universidad del Norte). En Brasil, la expansión del turismo en unidades de conservación amazónicas (Rio Negro, Serra do Aracá, Piagaçu-Purus) se ha asociado a la apropiación externa del territorio en detrimento de los pueblos originarios. Véase Barragán Alvarado, L. (2008). Pueblos Indígenas y Áreas Protegidas en América Latina. FAO/OAPN, REDPARQUES; y Maldonado Ibarra, O. A., Chávez Dagostino, R. M., y Bravo Olivas, M. L. (2020). "Áreas naturales protegidas y participación social en América Latina...". Región y sociedad, 32, e1277. En Guatemala, la Reserva de la Biosfera Maya enfrenta desde 2023 el avance de ganadería ilegal y asentamientos ligados al crimen organizado sobre Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón (Radwin, M., Mongabay Latam, 22 dic. 2023). En Nicaragua, la Reserva de la Biósfera Bosawás —territorio mayangna y miskitu— ha sufrido al menos tres masacres de colonos armados desde 2013, la más reciente en Wilú (11 de marzo de 2023, cinco comuneros asesinados), mientras el 66% de la reserva está concesionado a minería metálica (Carrere, M., Mongabay Latam, 28 mar. 2023). En Honduras, los pueblos Miskitu, Tawahka, Pech y Garífuna denunciaron en abril de 2026 ante el CONADEH una crisis ambiental sin precedentes en la Reserva de la Biósfera del Río Plátano (Patrimonio de la Humanidad UNESCO), exigiendo reconocimiento efectivo de su autonomía territorial (Bustillo, P., Infobae, 25 abr. 2026).

[34] Véase Maldonado Ibarra, O. A., Chávez Dagostino, R. M., y Bravo Olivas, M. L. (2020). "Áreas naturales protegidas y participación social en América Latina: problemas y estrategias para lograr la integración comunitaria". Región y sociedad, 32, e1277. https://doi.org/10.22198/rys2020/32/1277.

[35] Convenio sobre la Diversidad Biológica, Río de Janeiro, 5 de junio de 1992, art. 8 j), https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf.

[36] Posteriormente desarrollado como consentimiento libre, previo e informado. Veáse: Convenio sobre la Diversidad Biológica, Conferencia de las Partes, Decisión VII/28: Áreas protegidas, Anexo: Programa de trabajo sobre áreas protegidas, Decisión adoptada por la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica en su séptima reunión, UNEP/CBD/COP/7/21 (Kuala Lumpur, Malasia, 9 al 20 de febrero de 2004), https://www.cbd.int/doc/decisions/COP 07/full/COP 07-dec-es.pdf.

[37] Convenio sobre la Diversidad Biológica, Conferencia de las Partes, Decisión VII/16: Artículo 8 j) y disposiciones conexas, Sección F: Directrices voluntarias Akwé: Kon para la realización de evaluaciones de las repercusiones culturales, ambientales y sociales de proyectos de desarrollo que hayan de realizarse en lugares sagrados o en tierras o aguas ocupadas o utilizadas tradicionalmente por las comunidades indígenas y locales, o que puedan afectar a esos lugares, Decisión adoptada por la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica en su séptima reunión, UNEP/CBD/COP/7/21 (Kuala Lumpur, Malasia, 9 al 20 de febrero de 2004), https://www.cbd.int/doc/decisions/COP 07/full/COP 07-dec-es.pdf.

[38] Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica, Nagoya, Japón, 29 de octubre de 2010, artículos 7 y 12, https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-es.pdf.

[39] Convenio sobre la Diversidad Biológica, Conferencia de las Partes, Decisión X/2: El Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, Metas 11 y 18, Decisión adoptada por la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica en su décima reunión, UNEP/CBD/COP/DEC/X/2 (Nagoya, Japón, 18 al 29 de octubre de 2010), https://www.cbd.int/doc/decisions/COP 10/COP 10-dec-02-es.pdf.

[40] Convenio sobre la Diversidad Biológica, Conferencia de las Partes, Decisión XIII/18: Artículo 8 j) y disposiciones conexas: Directrices voluntarias Mo'otz Kuxtal para la elaboración de mecanismos, legislación u otras iniciativas adecuadas para garantizar el "consentimiento previo y fundamentado", el "consentimiento libre, previo y fundamentado" o la "aprobación y participación", según las circunstancias nacionales, de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales para el acceso a sus conocimientos, innovaciones y prácticas, para la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de sus conocimientos, innovaciones y prácticas pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, y para denunciar e impedir la apropiación ilegal de los conocimientos tradicionales, Decisión adoptada por la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica en su decimotercera reunión, CBD/COP/DEC/XIII/18 (Cancún, México, 17 de diciembre de 2016), https://

www.cbd.int/doc/decisions/COP 13/COP 13-dec-18-es.pdf.

[41] CDB, Decisión 14/8, definición de Otras Medidas Eficaces de Conservación Basadas en Áreas (OMEC).

[42] CDB, Decisión 15/4, Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (Meta 2 y Meta 3), diciembre de 2022. Reglamento de la Conferencia de las Partes del CDB, Regla 7.2 (participación de observadores), Metas 3 y 22.

[43] Convenio sobre la Diversidad Biológica, Conferencia de las Partes, Programa de trabajo hasta 2030 sobre el artículo 8 j) y otras disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica relativas a los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, Decisión adoptada por la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, CBD/COP/DEC/16/4 (Cali, Colombia, 30 de octubre de 2024), Anexo, párrafo 2, https://www.cbd.int/doc/decisions/COP16/COP16-dec-04-es.pdf.

[44] Ibid., párr. 5.

[45] Ibid., párr. 6.

[46] Ibid., párr. 8.

[47] Ibid., párr. 9.

[48] Ibid., Anexo, Sección III.

[49] Ibid., Tarea 1.1.

[50] United Nations Environment Programme (UNEP). Report of the Expert Group Meeting of Local Community Representatives within the Context of Article 8(j) and Related Provisions of the Convention on Biological Diversity. September 4, 2011. UNEP/CBD/WG8J/7/8/Add.1*. Montreal: Secretariat of the Convention on Biological Diversity. https://www.cbd.int/doc/meetings/tk/wg8j-07/official/wg8j-07-08-add1-en.doc.

[51] CDB, Decisión 16/6, "Role of people of African descent, comprising [collectives] embodying traditional lifestyles in the implementation of the Convention on Biological Diversity". CBD/COP/DEC/16/6. Cali, Colombia, 1 de noviembre de 2024, adoptada al cierre del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (Resolución 68/237 de la Asamblea General de la ONU).

[52] CDB, Decisión 15/4, Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (Meta 2 y Meta 3), diciembre de 2022. Reglamento de la Conferencia de las Partes del CDB, Regla 7.2 (participación de observadores), citada en oro Internacional Indígena sobre Biodiversidad, Directrices sobre los Territorios Indígenas y Tradicionales en el contexto de la conservación, el uso sostenible y la restauración de la biodiversidad: Guía versión 04 (Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad, 9 de julio de 2025), https://iifb-indigenous.org/, párr. 8.

[53] FIIB, RMIB-LAC, COICA, AIDESEP. "Informe: Taller Regional Amazónico sobre Territorios Indígenas y Tradicionales". Lima, Perú, 24–26 de marzo de 2026, Párr. 2.3.2.

[54] Decisión 16/5, COP16, Cali, 1 de noviembre de 2024, por la que la Conferencia de las Partes estableció el Órgano Subsidiario sobre el Artículo 8 j) y otras disposiciones del Convenio relacionadas con los Pueblos Indígenas y las comunidades locales. Confirmado contra el texto de la decisión reproducido en FIIB et al., "Taller Internacional sobre Territorios Indígenas y Tradicionales (ITTs) y Conservación de la Biodiversidad — Reporte Final" (véase nota 21), Anexo, Sección I ("Justificación"), párr. 1; se recomienda, de todos modos, verificarlo contra el texto oficial en cbd.int antes de la publicación final de este capítulo.

[55] FIIB, Ministerio de Pueblos Indígenas de Brasil, FUNAI, APIB, COIAB, RIB, RMIB-LAC, "Taller Internacional sobre Territorios Indígenas y Tradicionales (ITTs) y Conservación de la Biodiversidad — Reporte Final" (véase nota 21), intervención de Ricardo Camilo Niño (CNTI, Colombia), p. 14.

[56] FIIB, RMIB-LAC, COICA, AIDESEP. "Informe: Taller Regional Amazónico sobre Territorios Indígenas y Tradicionales". Lima, Perú, 24–26 de marzo de 2026, Párr. 2.3.2 (presentación de Johana Deza, WWF-US).

[57] CDB, Decisión 14/8, definición de Otras Medidas Eficaces de Conservación Basadas en Áreas (OMEC), citada en FIIB, RMIB-LAC, COICA, AIDESEP. "Informe: Taller Regional Amazónico sobre Territorios Indígenas y Tradicionales". Lima, Perú, 24–26 de marzo de 2026, Párr. 2.3.2.

[58] Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (2019). Glosario de términos y conceptos clave pertinentes para usar en el contexto del artículo 8 j) y disposiciones conexas (adoptado mediante la Decisión 14/13, COP 14, El Cairo, noviembre de 2018), Sección III, "Territorios tradicionales", p. 9. Documento verificado directamente en cbd.int/doc/guidelines/cbd-8j-GlossaryArticle-es.pdf (no estaba en el archivo de referencia local del proyecto; se recomienda incorporarlo a 03 Reference Archive).

[59] Brasil, Australia y Guyana tienen mecanismos formales de naturaleza distinta entre sí: Brasil opera un proceso de demarcación/titulación; Australia tiene un registro formal dentro de su sistema nacional de áreas protegidas; Guyana tiene un proceso de titulación de tierras amerindias con financiamiento externo. Ninguno constituye, en sentido estricto, un registro dedicado de Territorios Indígenas y Tradicionales como categoría distinta. Gobierno de Australia – National Indigenous Australians Agency / DCCEEW. Indigenous Protected Areas Programme.; Oviedo, A., Lima, W. P., & Souza, F. das C. (2025). Amazônia Quilombola: Ampliando a Cartografia sobre os Quilombos na Amazônia Legal. Nota Técnica. Instituto Socioambiental (ISA) & CONAQ, Brasília; Comisión de Tierras y Agrimensura de Guyana / Fondo Guyana REDD+ (GRIF). Amerindian Land Titling Project (Ley Amerindia 2006, guía de 2017). Véase también: https://www.mdpi.com/2073-445X/14/7/1493

[60] Bajo el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), cada Parte reporta sus áreas protegidas y otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas (OMEC/OECM) mediante los informes nacionales y el envío de datos a la Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas (WDPA) y la Base de Datos Mundial de OMEC (WD-OECM), administradas por el PNUMA-WCMC y la UICN en la plataforma Protected Planet, lo que permite medir el avance hacia la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (30% para 2030).

[61] Elaboración propia a partir de datos de: "Protected Planet," UNEP-WCMC and IUCN, accessed July 12, 2026, https://www.protectedplanet.net/en.

[62] Rights and Resources Initiative (RRI), Forest Peoples Programme, ICCA Consortium. "Enabling Pathways for Rights-based Community-led Conservation". Septiembre de 2025,

[63] Sangat, S. S. et al. "Afro-descendant lands in South America contribute to biodiversity conservation and climate change mitigation". Communications Earth & Environment 6, 458 (2025), DOI: 10.1038/s43247-025-02339-5, Results.

[64] Convenio sobre la Diversidad Biológica, Conferencia de las Partes, Programa de trabajo hasta 2030 sobre el artículo 8 j) y otras disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica relativas a los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, Decisión adoptada por la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, CBD/COP/DEC/16/4 (Cali, Colombia, 30 de octubre de 2024), https://www.cbd.int/doc/decisions/COP16/COP16-dec-04-es.pdf.

[65] Chinkin, C. (1989). "The Challenge of Soft Law: Development and Change in International Law", International and Comparative Law Quarterly, 38(4), 850–866; Boyle, A. (1999). "Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law", ICLQ, 48(4), 901–913; Abbott, K. y Snidal, D. (2000). "Hard and Soft Law in International Governance", International Organization, 54(3), 421–456.

[66] Decisión VII/16 F (COP 7, Kuala Lumpur, 2004), Directrices Akwé:Kon; Decisión XIII/18 (COP 13, Cancún, 4–17 de diciembre de 2016), Directrices Voluntarias Mo'otz Kuxtal

[67] FAO (2012). Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional.

[68] Véase por ejemplo: Corte IDH, Caso Pueblos Kaliña y Lokono vs. Surinam, sentencia de 25 de noviembre de 2015 (fondo, reparaciones y costas).

[69] Convenio sobre la Diversidad Biológica, Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Propuesta de elementos para las directrices relacionadas con las tareas 1.1 y 1.2 del programa de trabajo hasta 2030 sobre el artículo 8 j) y otras disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica relativas a los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, Documento del Órgano Subsidiario sobre el Artículo 8(j) y Otras Disposiciones, CBD/SB8J/1/4 (Montreal: Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 6 de agosto de 2025), https://www.cbd.int/doc/c/f2c2/594d/0789057202da07ad87dc5b96/sb8j-01-04-en.pdf

[70] FIIB, Ministerio de Pueblos Indígenas de Brasil, FUNAI, APIB, COIAB, RIB, RMIB-LAC. "Taller Internacional sobre Territorios Indígenas y Tradicionales (ITTs) y Conservación de la Biodiversidad — Reporte Final", pp. 65–88. Manaos, Brasil, 2–5 de septiembre de 2025 (versión oficial, octubre de 2025).

[71] Convenio sobre la Diversidad Biológica, Órgano Subsidiario sobre el Artículo 8 j) y Otras Disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica Relativas a los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales, Recomendación 1/3: Elementos propuestos para las directrices relacionadas con las tareas 1.1 y 1.2 del programa de trabajo hasta 2030 sobre el artículo 8 j) y otras disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica relativas a los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, CBD/SB8J/REC/1/3 (Montreal, Canadá, 30 de octubre de 2025), https://www.cbd.int/doc/recommendations/sb8j-01/sb8j-01-rec-03-es.pdf.

[72] International Institute for Sustainable Development (IISD), Earth Negotiations Bulletin. "27th Session of the CBD Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice (SBSTTA 27) and 1st Session of the Subsidiary Body on Article 8(j) and Other Provisions Related to Indigenous Peoples and Local Communities (SB8j 1)". Summary report, 20–30 de octubre de 2025, Ciudad de Panamá. Disponible en: https://enb.iisd.org/cbd-subsidiary-body-scientific-technical-technological-advice-sbstta27-sb8j1-summary (consultado el 5 de julio de 2026).

[73] IISD, Earth Negotiations Bulletin, Summary report 20–30 de octubre de 2025 (SBSTTA-27/SB8j-1), Panamá. https://enb.iisd.org/cbd-subsidiary-body-scientific-technical-technological-advice-sbstta27-sb8j1-summary (consultado el 5 de julio de 2026).

[74] Conteo resultante de comparar el Borrador Cero (CBD/SB8J/1/4) con el Borrador de Panamá (CBD/SB8J/REC/1/3) a la luz de las demandas de la propuesta TTIT/FIIB: 10 avances plenos + 5 incorporaciones parciales; 11 regresiones fijadas; 5 disposiciones bajo presión.

[75] Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas (WDPA) y Base de Datos Mundial de OMEC (WD-OECM), administradas por UNEP-WCMC.

[76] IISD, Earth Negotiations Bulletin, cit. (véase nota 40), sección sobre financiamiento y enfoque basado en derechos humanos: propuestas de Noruega y Nueva Zelanda. IISD, Earth Negotiations Bulletin, Summary report 20–30 de octubre de 2025 (SBSTTA-27/SB8j-1), Panamá. https://enb.iisd.org/cbd-subsidiary-body-scientific-technical-technological-advice-sbstta27-sb8j1-summary (consultado el 5 de julio de 2026).

[77] IISD, Earth Negotiations Bulletin, Summary report 20–30 de octubre de 2025 (SBSTTA-27/SB8j-1), Panamá. https://enb.iisd.org/cbd-subsidiary-body-scientific-technical-technological-advice-sbstta27-sb8j1-summary (consultado el 5 de julio de 2026).

[78] CDB, Decisión 16/6, "Role of people of African descent, comprising [collectives] embodying traditional lifestyles in the implementation of the Convention on Biological Diversity". CBD/COP/DEC/16/6. Cali, Colombia, 1 de noviembre de 2024.

[79] El art. 1.1.a) del Convenio núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989) define a los pueblos tribales como aquellos "cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial". A diferencia de la definición de Pueblos Indígenas del art. 1.1.b) —que exige descender de poblaciones anteriores a la conquista, la colonización o el establecimiento de las fronteras estatales actuales—, la categoría de "pueblos tribales" no exige ese criterio de ascendencia histórica: basta la distinción social, cultural y económica respecto de la sociedad nacional y la regulación por costumbres, tradiciones o legislación propia. Por esta razón, la categoría ha sido invocada en varios países de América Latina como fundamento jurídico para extender la protección del Convenio 169 a pueblos afrodescendientes —quilombolas en Brasil, comunidades negras en Colombia, garífunas en Honduras y Nicaragua— sin necesidad de que se les reconozca como "indígenas" en sentido estricto. El art. 1.2 añade que la autoidentificación como indígena o tribal es criterio fundamental para determinar los grupos amparados, y el art. 1.3 aclara que el uso del término "pueblos" no implica los derechos que ese término pueda tener en el derecho internacional. (Instrumento de Ratificación, BOE núm. 58, de 8 de marzo de 2007).

[80] El bloque de Estados con reconocimiento constitucional de territorios indígenas y afrodescendientes enfrenta, de cara a Nairobi y la COP17, retrocesos políticos que debilitan su cohesión previsible. En Colombia, el candidato de derecha Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) ganó la segunda vuelta del 21 de junio de 2026 y asume el 7 de agosto de 2026 —días antes del diálogo informal de Nairobi—, sucediendo a un gobierno de Gustavo Petro que había sido la voz más activa en la SB8j-1 a favor del reconocimiento de los pueblos afrodescendientes. En Perú, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) ganó en junio de 2026 sobre Roberto Sánchez (Juntos por el Perú); Fuerza Popular no ha priorizado históricamente la consulta previa ni el reconocimiento territorial indígena. En Bolivia, el gobierno de Rodrigo Paz —que en octubre de 2025 puso fin a veinte años de gobiernos del MAS— promulgó en abril de 2026 la Ley 1720 de tierras, rechazada por organizaciones indígenas y campesinas por beneficiar al agronegocio y facilitar la deforestación; la norma motivó una marcha indígena de 28 días hasta La Paz y movilizaciones que en mayo-junio de 2026 llegaron a exigir la renuncia del presidente. En Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa impulsa en 2026 una reforma minera y energética que elimina la consulta previa como requisito y sustituye las licencias ambientales por autorizaciones simplificadas. Surinam sigue siendo el único país sudamericano sin una ley que formalice los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas y afrodescendientes, pese a la sentencia de 2007 de la Corte Interamericana sobre el pueblo Saamaka. De los seis países que, durante las negociaciones, componían el grupo de aliados, solo Brasil conserva, por ahora, un gobierno favorable al reconocimiento de los TIT —y su continuidad depende de la elección presidencial del 4 de octubre de 2026 (segunda vuelta eventual el 25 de octubre), celebrada dentro de la propia ventana de la COP17 (19–30 de octubre); las encuestas de mediados de 2026 muestran a Lula da Silva liderando sin mayoría de primera vuelta frente a Flávio Bolsonaro.

[81] Rojas Castillo, J. (2023). Los Pueblos Indígenas de Panamá y su relación con el Estado. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Asesoría Técnica Parlamentaria; Asamblea Nacional de Panamá. (2008). Ley 72 de 23 de diciembre de 2008, que establece el procedimiento especial para la adjudicación de la propiedad colectiva de tierras de los Pueblos Indígenas que no están dentro de las comarcas. Gaceta Oficial No. 26193.

[82] Ministerio de Ambiente. (2025). Memoria 2025. Ministerio de Ambiente de Panamá.

[83] Ibid.

[84] Ibid.

[85] Alejo, C., Ortega, M., Leung, B., Coomes, O. T., & Potvin, C. (2025). Diverse values regarding nature are related to stable forests: The case of Indigenous lands in Panama. Ecology and Society, 30(1), 24. https://doi.org/10.5751/ES-15540-300124; Alejo, C., Walker, W. S., Gorelik, S. R., & Potvin, C. (2022). Community managed protected areas conserve aboveground carbon stocks: Implications for REDD+. Frontiers in Forests and Global Change, 5. https://doi.org/10.3389/ffgc.2022.787978; Alejo, C., Meyer, C., Walker, W. S., Gorelik, S. R., Josse, C., Aragon-Osejo, J. L., Rios, S., Augusto, C., Llanos, A., Coomes, O. T., & Potvin, C. (2021). Are Indigenous territories effective natural climate solutions? A neotropical analysis using matching methods and geographic discontinuity designs. PLOS ONE, 16, e0245110. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245110; Herlihy, P. H. (2003). Participatory research mapping of Indigenous lands in Darién, Panama. Human Organization, 62(4), 315–331. https://doi.org/10.17730/humo.62.4.fu05tgkbvn2yvk8p; Kunz, M., Barrios, H., Dan, M., Dogirama, I., Gennaretti, F., Guillemette, M., Koller, A., Madsen, C., Lana, G., Ortega, A., Ortega, M., Paripari, J., Piperno, D., Reich, K. F., Simon, T., Solis, F., Solis, P., Valdes, J., von Oheimb, G., & Potvin, C. (2022). Bacurú Drõa: Indigenous forest custody as an effective climate change mitigation option. A case study from Darién, Panama. Frontiers in Climate, 4. https://doi.org/10.3389/fclim.2022.1047832

[86] Alejo, C., Ortega, M., Leung, B., Coomes, O. T., & Potvin, C. (2025). Diverse values regarding nature are related to stable forests: The case of Indigenous lands in Panama. Ecology and Society, 30(1), 24. https://doi.org/10.5751/ES-15540-300124

[87] Lichtenstein, J. (2016). Áreas Protegidas en Panamá: Un obstáculo para el reconocimiento legal de las tierras y los territorios indígenas. Fundación PRISMA & Rainforest Foundation US. Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá — INEC. (2023). Cuadro 20. Población indígena en la República, por sexo, según provincia, comarca indígena, grupo indígena al que pertenece y grupos de edad: Censo 2023.

[88] Alejo, C., Ortega, M., Leung, B., Coomes, O. T., & Potvin, C. (2025). Diverse values regarding nature are related to stable forests: The case of Indigenous lands in Panama. Ecology and Society, 30(1), 24. https://doi.org/10.5751/ES-15540-300124

[89] Marcus, C. (2025). "The Indigenous World 2025: Panama." International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA).

[90] Lichtenstein, J. (2016). Áreas Protegidas en Panamá: Un obstáculo para el reconocimiento legal de las tierras y los territorios indígenas. Fundación PRISMA & Rainforest Foundation US. Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá — INEC. (2023). Cuadro 20. Población indígena en la República, por sexo, según provincia, comarca indígena, grupo indígena al que pertenece y grupos de edad: Censo 2023.

[91]

[92] Fundación TIERRA. (2012). Territorio Indígena Takana-Cavineño. Observatorio de Territorios Indígenas en Bolivia. https://territorios.ftierra.org/index.php?option=com_content&view=article&id=167:rair&catid=40:amazonia-norte&Itemid=108

[93] MapBiomas. (2024a). Coverage — Estación Biológica del Beni (Reserva de la Biósfera), Amazonía, Bolivia [Conjunto de datos]. Plataforma MapBiomas. https://plataforma.mapbiomas.org/coverage/coverage_lclu?tl[id]=1&tl[themeKey]=coverage&tl[subthemeKey]=coverage_lclu&t[regionKey]=bolivia&a[territoryOfInterest][name]=Estaci%C3%B3n+Biol%C3%B3gica+del+Beni

[94] Hope, J. (2016). Losing ground? Extractive-led development versus environmentalism in the Isiboro Secure Indigenous Territory and National Park (TIPNIS), Bolivia. The Extractive Industries and Society, 3(4), 922–929. https://doi.org/10.1016/j.exis.2016.10.005

[95] MapBiomas. (2024b). Coverage — Isiboro Sécure (TIPNIS), Amazonía, Bolivia [Conjunto de datos]. Plataforma MapBiomas. https://plataforma.mapbiomas.org/coverage/coverage_lclu?tl[id]=1&tl[themeKey]=coverage&tl[subthemeKey]=coverage_lclu&t[regionKey]=bolivia&a[territoryOfInterest][name]=Isiboro+Secure+(TIPNIS)

[96] Global National Parks. (s. f.). Reserva de Biosfera Estación Biológica del Beni en Bolivia: Guía completa. Recuperado el 3 de julio de 2026, de https://www.globalnationalparks.com/es/bolivia/beni/

[97] MapBiomas. (2024c). Coverage — Takana-Cavineño, Amazonía, Bolivia [Conjunto de datos]. Plataforma MapBiomas. https://plataforma.mapbiomas.org/coverage/coverage_lclu?tl[id]=1&tl[themeKey]=coverage&tl[subthemeKey]=coverage_lclu&t[regionKey]=bolivia&a[territoryOfInterest][name]=Takana+-+Cavine%C3%B1o

[98] MapBiomas, 2024a; Mongabay Latam. (2024). Balance ambiental de Bolivia en 2024: fuego devasta más de 10 millones de hectáreas de bosque, deforestación no se detiene y minería ilegal sigue dañando ríos.

[99] MapBiomas (2024a, b, c).

[100] Los Tiempos. (2024, noviembre). Reservas de la biosfera son amenazadas por minería, incendios y deforestación; CEJIS. (2024). Informe: Focos de calor y cicatrices de incendios en territorios indígenas de las Tierras Bajas de Bolivia.

[101] Los Tiempos, 2024; CEJIS, 2024; Global Forest Watch / World Resources Institute. (2025). Datos de pérdida de cobertura arbórea y bosque primario en Bolivia, series 2001–2023 y 2025. World Resources Institute.

[102] Guerrero Lovera, C. C. (2022). La búsqueda del derecho territorial. Buenas prácticas en titulación colectiva en el marco del proyecto Titulación Colectiva de Tierras Ancestrales Afrodescendientes en Colombia. Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, Pontificia Universidad Javeriana; Proceso de Comunidades Negras.

[103] Garcés Mosquera, S. E. (2023). La revolución agraria afrocolombiana. Memorias de la política de territorialidad de las comunidades negras de Colombia. Tomo III: La titulación de los territorios colectivos de comunidades negras, resultados y perspectivas. Aula de Humanidades; Vélez, M. A., Robalino, J., Cárdenas, J. C., Paz, A., & Pacay, E. (2020). Is collective titling enough to protect forests? Evidence from Afro-descendant communities in

the Colombian Pacific region. World Development, 128, 104837; Guerrero Lovera, C. C. (2022). La búsqueda del derecho territorial. Buenas prácticas en titulación colectiva en el marco del proyecto Titulación Colectiva de Tierras Ancestrales Afrodescendientes en Colombia. Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, Pontificia Universidad Javeriana; Proceso de Comunidades Negras.

[104] Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2016). Bosques, territorios colectivos y comunidades negras en Colombia. MADS.

[105] Ibid; Instituto Alexander von Humboldt. (2015). Biodiversidad 2015. Estado y tendencias de la biodiversidad continental de Colombia. Territorios colectivos y biodiversidad. Instituto Humboldt.

[106] IDEAM. (2024). Monitoreo de la superficie de bosque y deforestación en Colombia 2024. Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono.

[107] Sangat, S. S., Rosero, M., Olsson, E., Nowakowski, A. J., Drescher-Lehman, J., Roehrdanz, P. R., Noon, M. L., McManus, N., Perz, S. G., Angel, M., Krieger, J. M., Brock, C., Coutinho, B., Martinez, C., Douglas, L. R., Bernard, C., Trustfull, L., Raik, D., Troëng, S., & Alie, K. (2025). Afro-descendant lands in South America contribute to biodiversity conservation and climate change mitigation. Communications Earth & Environment, 6, 458. https://doi.org/10.1038/s43247-025-02339-5

[108] Ambiente y Sociedad. (2017). Propuesta de lineamientos de monitoreo forestal comunitario participativo. Asociación Ambiente y Sociedad.

[109] Vélez, M. A., Robalino, J., Cárdenas, J. C., Paz, A., & Pacay, E. (2020). Is collective titling enough to protect forests? Evidence from Afro-descendant communities in the Colombian Pacific region. World Development, 128, 104837

[110] Universidad del Tolima, citado en Morales, L. (2018). Custodios del Yurumanguí. Semana Sostenible.

[111] Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2023). Más de 20 años tardará en recuperarse área de Farallones de Cali afectada por minería ilegal. MADS; El Espectador. (2026). Parque Farallones de Cali perdió 1.700 hectáreas de vegetación durante 2025. Redacción Ambiente.

Lista de Abreviaturas

CDB - Convenio sobre la Diversidad Biológica

CLPI - Consentimiento Libre, Previo e Informado

CL - Comunidades Locales

COP - Conferencia de las Partes

FIIB - Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad

LMMC - Países Megadiversos Afines

NBSAP - Estrategia y Plan de Acción Nacional en materia de Biodiversidad

OMEC - Otras Medidas Eficaces de Conservación Basadas en Áreas

SBSTTA - Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico

PICL - Pueblos Indígenas e Comunidades Locales

PNN - Parque Nacional Natural

PA – Areas Protegidas

PAD - Pueblos Afrodescendientes

PI - Pueblos Indígenas

RRI - Rights and Resources Initiative

SB8J - Órgano Subsidiario sobre el Artículo 8 j

TICCA - Territorios y Áreas Conservados por Pueblos Indígenas y Comunidades Locales.

TCO - Territorio Comunitario de Origen

TIOC - Territorios Indígenas Originarios

TIPNIS - Parque Nacional Seguro de Isiboro y Territorio Indígena

TIT - Territorios Indígenas y Tradicionales

TTIT - Taller Internacional sobre Territorios Indígenas y Tradicionales

UNDRIP - Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

UNEP – United National Environmental Programme

WDPA - Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas

WD-OECM - Base de Datos Mundial de OMEC

WCMC - Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación

